

PONENCIA POLÍTICA



ÍNDICE

NOSOTROS, LOS ESPAÑOLES	4
PRINCIPIOS Y VALORES	8
POLÍTICA INSTITUCIONAL	11
La Nación	11
La política	15
Las instituciones y los poderes del Estado	16
Desinformación y libertad de expresión	19
Libertad y Seguridad	20
POLÍTICA SOCIAL	24
La familia: nuestra prioridad	25
La vivienda: un bien accesible	27
Educación: libertad, calidad y responsabilidad	28
La infancia	30
Juventud: hemos entendido el mensaje	31
Ni trabas ni culpas: Igualdad real	32
Cuidar a quienes nos cuidaron	33
Una sanidad que trata, cura y previene	34
POLÍTICA ECONÓMICA	36
Apoyar a los que arriesgan	37
Juventud y empleo: recuperar el ascensor social	38
Mercado laboral: defender a los que trabajan	39
Un país de oportunidades, vivas donde vivas	40
Infraestructuras, energía y agua: preparados para competir	41
Agricultura y pesca: seguridad en lo básico	42
Un Estado que funciona	43
Gastar bien y aliviar la carga fiscal	44
POLÍTICA INTERNACIONAL	46
Seguridad y Defensa	47
Europa	47
Gibraltar	49
África	49

América	50
Asia	50
Un libre comercio responsable	51
Cooperación al desarrollo	51
El español	52
Espanoles en el exterior	52

NOSOTROS, LOS ESPAÑOLES

Pronto se cumplirán 50 años del inicio de la Transición; quizá, la mayor gesta de nuestra historia moderna y, a buen seguro, nuestra mejor obra colectiva. La empresa no era fácil, porque veníamos de una guerra civil y de una larga dictadura que frustró las ansias de reconciliación del pueblo español. Así que empezamos por lo urgente, que era, además, lo más importante: recuperar la primera persona del plural —«Nosotros, los españoles»—, el sujeto que habría de protagonizar un nuevo tiempo histórico.

Se ha escrito mucho sobre el consenso de la Transición, pero quizá baste explicarlo como la efectiva reconciliación de los españoles, reunidos para escribir juntos nuestra historia. El fruto político de esa etapa fue la España del 78, que se erigió sobre tres pilares: la monarquía parlamentaria, símbolo de la unidad y permanencia de España, la Constitución, que consagró la democracia y el Estado de Derecho, y el Estado de las autonomías, que quiso articular la diversidad sin merma de la cohesión nacional.

Ese modelo nos llevó después a Europa. Una Europa en cuya construcción el Partido Popular tuvo y sigue manteniendo un papel protagonista, y que pasó de ser un sueño lejano a una realidad cotidiana: ahora que se cumplen 40 años de la entrada de nuestro país en la Unión, podemos afirmar que las cuestiones europeas se han convertido en temas de política interna.

Efectivamente, la de 1978 ha sido la mejor España de todas. La más libre y la más próspera. Pero hoy está amenazada en su existencia misma como Nación.

El proceso comenzó hace años. El hundimiento del socialismo y la crisis de la socialdemocracia a lo largo de toda Europa, empujaron a la izquierda hacia la búsqueda de nuevas estrategias. La radicalización del discurso y la agitación de las minorías sustituyeron a la búsqueda de los grandes consensos sociales que habían permitido el progreso sostenido de nuestros países. El intento de deslegitimar al adversario político y de frustrar así la natural alternancia democrática se hicieron moneda común, no solo en la izquierda.

Este proceso tiene en España unos rasgos propios que lo hacen más grave. Convencidos de su incapacidad para conformar una mayoría social en torno a su propio proyecto político, los actuales dirigentes socialistas vieron en la extrema izquierda, las fuerzas independentistas y los herederos políticos de ETA su única

oportunidad para acceder al gobierno. Dejaron atrás sin remordimiento alguno décadas centradas en la construcción de un país más integrado y robusto. La Transición política y la cohesión nacional han sido sus víctimas.

Las primeras políticas de la mal llamada “memoria democrática” ya mostraron una voluntad de poner fin al consenso de la Transición, y pronto recuperaron la retórica del enfrentamiento. El «nosotros» se hizo cada vez más difícil de conjugar, y finalmente el PSOE decidió asumir por completo una dinámica política que no se asienta sobre la idea de nación común, sino sobre la exclusión del discrepante.

Han buscado aglutinar a las fuerzas de izquierda con los secesionistas, renunciando a ejercer cualquier tipo de liderazgo transversal dirigido al conjunto de los españoles. Una vez en el poder, la retórica polarizadora y la lógica de bloques se ha convertido en el eje de una estrategia de supervivencia. Quieren levantar muros entre españoles para cerrar el paso a cualquier alternativa.

Por primera vez en democracia esos apoyos han tenido un precio inadmisibles. Formaciones que solo defienden los intereses de una parte, que trabajan abiertamente por la desintegración o que, incluso, han sido condenados por sedición, controlan la gobernabilidad y tienen la última palabra sobre las políticas de Estado. Indultos a condenados por el Tribunal Supremo, eliminación del delito de sedición, reducción de penas a la malversación, eliminación de contrapesos al poder y politización de los órganos constitucionales, fueron las primeras consecuencias palpables de los acuerdos alcanzados. El partido heredero de ETA es recibido en la Moncloa como partido de Estado.

Por primera vez en democracia, también, no fue el candidato del partido más votado quien salió investido como presidente, y eso ocurrió porque se pactó la amnistía de los más graves delitos contra el Estado, se garantizó la impunidad a cambio del voto, sin importar ni por un momento cómo se iba a gobernar después.

Por primera vez, además, se avanza en una legislatura incumpliendo de forma reiterada la Constitución al ni siquiera presentar durante dos años los Presupuestos Generales del Estado y rompiendo la unidad de la política migratoria.

Por primera vez, un Gobierno reacciona a sus graves casos de corrupción atacando a la Judicatura y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, indiferente al profundo daño institucional que tal actitud acarrea.

Por primera vez, y por pura supervivencia política, los actuales dirigentes del partido socialista están asumiendo como propia una mutación constitucional que pretende hacer de España un Estado plurinacional, de corte confederal, que no existe.

El resultado: un Estado de derecho más débil, unas instituciones cada día menos neutrales, a separación de poderes en entredicho, el principio de igualdad ante la ley maltrecho y la quiebra de la solidaridad entre españoles. O lo que es lo mismo: el interés superior de la mayoría ha quedado supeditado al interés de una única persona.

Un Gobierno que destina todas sus energías a conservar los apoyos de unos socios que lo someten a un chantaje permanente, y a defenderse públicamente de los escándalos de corrupción que lo acorralan, es un Gobierno incapacitado para hacer frente a los desafíos que atraviesa nuestra Nación.

Desde hace siete años, España es un país paralizado y sumido en el desgobierno. Nuestra productividad está estancada y hemos caído en renta per cápita frente a los países con los que nos debemos comparar. Sin presupuestos, incapaces de utilizar con inteligencia los fondos europeos, los españoles pagan cada día más impuestos para recibir peores servicios del Gobierno Central, como el transporte ferroviario o la atención el SEPE y el INSS, etc.

Nuestras infraestructuras fallan ante la falta de inversión y mantenimiento. La oferta de vivienda no es suficiente para responder a la demanda, y los precios no paran de subir. Lo que no crecen son los salarios, pero la vida es cada vez más cara. Y hemos dejado de ser un socio internacional fiable, justo cuando se están produciendo los cambios más profundos en el orden mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como da buena muestra la reciente Cumbre de la OTAN en la que se niega lo firmado.

Esta combinación de degradación democrática y moral, corrupción, polarización y pérdida de competitividad nos está conduciendo a la decadencia. Los españoles merecen un Gobierno dedicado a ellos. Y el Partido Popular está preparado para ofrecerlo. Se inicia ahora un largo ciclo electoral que recorrerá todos los niveles. No se trata de un nuevo episodio de nuestra rutina política.

Estamos ante una encrucijada que decidirá el futuro de España, la unidad nacional, el alcance de la solidaridad entre españoles, la calidad de nuestro sistema democrático y nuestra posición en el mundo. Van a ser, todas y cada una de las próximas citas electorales, la última oportunidad para poner fin a una etapa disolvente. Y en el Partido Popular estamos preparados para afrontar el reto.

Juntos, los españoles volveremos a hacer grandes cosas. No tenemos ambiciones pequeñas. Ofrecemos unidad frente a la fragmentación, sincera voluntad de acuerdo frente a los intentos ajenos de ruptura y seguridad jurídica frente a la arbitrariedad. Buscaremos el apoyo de todos aquellos que quieran aportar al proyecto común. Pedimos la confianza de los españoles para llevar a cabo un mandato reformista, que sea reparador allí donde haga falta reparar, que reconstruya donde debemos reconstruir y que cree donde todavía no se ha llegado. Hemos venido a derribar el muro que han querido levantar para separarnos. Hemos venido a dar paso a un tiempo político nuevo, en el que el sujeto protagonista vuelva a conjugarse en primera persona del plural: «Nosotros, los españoles».

Hay muchas cosas por hacer, desde acometer la regeneración democrática hasta desarrollar una agenda de prosperidad que restaure el progreso material. Desde el Partido Popular apelamos a esa gran mayoría de españoles que desean permanecer unidos, establecer cada día vínculos más estrechos y solidarios, que quieren compartir un futuro mejor. Y lo hacemos a través de esta ponencia que recoge nuestro compromiso con todos los españoles, el proyecto de país que vamos a defender si nos dan su confianza.

PRINCIPIOS Y VALORES

El PP es un partido de centro-reformista que aspira a ser la casa común de liberales, democristianos y conservadores para representar a todos los que defienden la democracia liberal, la economía social de mercado, la libertad, el Estado de derecho, la igualdad ante la ley y la dignidad de toda vida humana, como valores esenciales de Occidente, y una Unión Europea fuerte y una España, como nación soberana, unida y plural, a cuyo futuro quieren contribuir.

Creemos en la democracia liberal y el Estado social y democrático de Derecho porque es el mejor sistema para garantizar y proteger la libertad, la participación ciudadana y los derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución frente al abuso y la arbitrariedad. Nos comprometemos con una justicia independiente, unos medios de comunicación libres e independientes y la separación de poderes como manera de garantizar la democracia y el imperio de la ley.

Defendemos la economía social de mercado, instrumento imprescindible para propiciar la responsabilidad y el desarrollo individual de cada persona, la libertad económica y la iniciativa privada, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Entendemos que el libre intercambio de ideas es fundamento esencial de la democracia, requisito para la libertad personal y fuente de crecimiento social y económico. Rechazamos la imposición de dogmas políticos que cercenan la libertad de expresión y fomentan la autocensura, la cultura de la cancelación, y colectivizan a los ciudadanos.

La unidad de la Nación española es fruto de nuestra historia, nuestros valores y nuestra cultura compartida y representa la mejor garantía de futuro, inspiración y fortaleza. Como dice la Constitución y simboliza la Corona, España es patria común e indivisible de todos los españoles. No somos un país uniforme: amamos y reivindicamos nuestros contrastes. Frente a los separatismos insolidarios y la demagogia recentralizadora, creemos que el Estado de las Autonomías, aún perfectible, no solo es el que mejor se ajusta a la realidad de nuestra nación y la pluralidad de sus ciudadanos, sino que supone un mecanismo de contrapeso dentro del propio poder ejecutivo.

Asumimos como partido la defensa de un proyecto nacional único, válido para todos los españoles cualquiera que sea su lugar de residencia, respetuoso con las singularidades que conforman y enriquecen nuestra realidad. Creemos

que España se construye a través de un doble compromiso de solidaridad: entre personas y entre generaciones.

Consideramos que es el momento de fortalecer y consolidar un Estado autonómico racional y viable. Somos un partido construido sobre una sólida base autonómica y local y trabajamos para ampliar los elementos comunes del modelo, garantizar su eficacia y su eficiencia, y combatir las tendencias insolidarias o independentistas.

Nuestra prioridad es el bien común. Estamos decididos a servir a todos los españoles y a el sentimiento de pertenencia a una comunidad compartida. Esa es la base de nuestro proyecto político: fortalecer la unión a través de las diferencias, porque la unión no es uniformidad.

Entendemos la política como servicio, no como poder. Gobernar no es imponer, sino tomar decisiones y gestionar recursos con responsabilidad. El verdadero liderazgo no se mide por el control que se ejerce, sino por la capacidad de mejorar la vida de las personas. La política no debe ser un fin en sí misma, sino una herramienta al servicio del bien común y debe transmitir serenidad a la sociedad.

Defendemos una nación de ciudadanos libres e iguales. Nos oponemos a toda operación política que defienda la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Impulsamos el progreso económico y la cohesión social sin discriminaciones entre personas, edades, sexos, territorios o cualquier otra condición personal o social. Trabajamos para que los derechos sean inherentes a la ciudadanía y no al lugar de residencia.

La Transición, que culminó en la Constitución del 78, es el momento fundacional de nuestra democracia. Creemos que es el mejor ejemplo del espíritu de reconciliación que nos permitió avanzar como nación y un legado que debemos honrar. Estamos en contra de que se utilice la historia para enfrentarnos.

La persona es el centro de nuestra acción política. Creemos y respetamos al individuo. Cada persona es el verdadero actor y responsable de cualquier cambio social. Cada persona, gracias a su trabajo y su esfuerzo, es capaz de alcanzar todos los éxitos.

Nuestros valores nacen del humanismo cristiano: la dignidad de la vida humana, la libertad, la responsabilidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el carácter subsidiario del Estado. El Estado debe estar allí donde la persona y la sociedad organizada no pueden llegar y no debe aspirar a reemplazarlos.

Queremos que España sea una sociedad de personas autónomas. Los españoles sabemos hacer las cosas bien, por y para nosotros mismos: hemos demostrado muchas veces que podemos construir nuestro futuro sobre bases sólidas. La política no puede ser una fábrica de ciudadanos dependientes, ni decir a las personas lo que deben ser, hacer o pensar; debe ayudar a construir una sociedad suficientemente fuerte que retribuya los talentos individuales e integre a quienes sufren desventajas. Por eso, estamos a favor de una sociedad y un tejido asociativo fuertes e independientes como contrapeso democrático que favorece el equilibrio, el pluralismo y la libertad propias de una democracia liberal madura.

Confiamos en el mérito y en la cultura del esfuerzo, y creemos que la Administración, la empresa, el sistema educativo y la sociedad deben reconocer estas virtudes y estimularlas. Son las personas, en un contexto de estabilidad política, seguridad jurídica y apoyo público, los grandes impulsores de la prosperidad. Somos una sociedad con talento, que tiene que recuperar el trabajo y el esfuerzo como palancas de ascensor social.

Creemos en un Estado limitado, eficaz y subsidiario. Un Estado bien gestionado que potencie y estimule la iniciativa individual y la responsabilidad, y que respete el protagonismo de la sociedad. Para que los ciudadanos confíen en la gestión de la Administración, ésta debe tener unas cuentas públicas saneadas y más transparentes.

Defendemos el reformismo como forma de hacer política. Ser reformista es creer en la mejora constante y gradual de nuestro país. Es unir a tus conciudadanos, reconociendo su pluralidad de opiniones, y buscar juntos soluciones estables para avanzar. Es necesario reformar lo que haya que reformar y proteger lo que funciona.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Las instituciones democráticas en España han sido violentadas. Se han quebrado deliberadamente muchos de los grandes acuerdos que alumbraron el modelo constitucional. De continuar el deterioro, nos arriesgamos a que sea irreversible.

El Partido Popular impulsa un proyecto nacional, articulado en torno al Estado de las autonomías. Ponemos la descentralización al servicio de todos los españoles para acercar a la ciudadanía la toma de decisiones sin debilitar los vínculos que vertebran la Nación. Frenaremos en seco cualquier aspiración de quienes pretenden a construir sus propias estructuras de Estado como paso previo a una pretendida independencia. Unidad y descentralización son conceptos perfectamente compatibles cuando la lealtad institucional orienta la toma de decisiones.

Debemos construir un nuevo tiempo, inspirados en el gran acuerdo del 78, para que su impulso siga vigente en un mundo y un país muy distintos a los de entonces. El momento exige reforzar los mecanismos de frenos y contrapesos que velan por su plena vigencia. Hay que desterrar el sectarismo, el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad de la vida pública. Y, por supuesto, proteger la independencia y profesionalidad que legitiman la función arbitral que corresponde ejercer a los órganos de garantía.

En momentos como éste, el inmovilismo no es una opción. España tiene la obligación de acometer reformas estructurales para garantizar los servicios públicos a través de la competitividad de la economía, en los campos de la educación, la sanidad, las pensiones, la fiscalidad, la innovación, la defensa, la seguridad, la unidad de mercado, la regulación de la actividad económica, la energía, los recursos hídricos, la gestión de crisis, así como para garantizar la calidad institucional, la separación de poderes y la política internacional. Estas reformas han de devolver la confianza a los españoles y fortalecer nuestras instituciones.

Es hora de restaurar el equilibrio, desde la responsabilidad política y el respeto a la legalidad, y recuperar el diálogo parlamentario frente a la deriva presidencialista, como mejor forma de hacer frente a los desafíos del presente y, sobre todo, del futuro. No se trata de un ejercicio de nostalgia, sino de realismo y responsabilidad política ante los desafíos presentes y, sobre todo, futuros.

La Nación

Es el momento de plantear a todos los españoles un proyecto nacional, coherente y libre de imposiciones. España necesita un sistema que garantice la igualdad entre ciudadanos, la estabilidad institucional y el respeto a la soberanía nacional. Debemos dotarnos de una organización territorial más clara, donde las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas estén bien definidas, evitando ambigüedades, revisionismo y conflictos permanentes. Los Estatutos no pueden convertirse en espacios de negociación paralela ni fuente de privilegios. Hay que reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones, hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento del Estado autonómico y asegurar que la financiación se base en criterios objetivos, no en acuerdos bilaterales que rompen la cohesión y solo sirven a criterios partidistas. Es imperativo frenar la imposición de minorías nacionalistas que, con pocos votos, menoscaban los principios constitucionales y condicionan decisiones clave para el conjunto del país. Apostamos por un sistema leal, cooperativo y equitativo, que refuerce la unidad sin eliminar la diversidad. Un marco territorial fuerte, con reglas comunes, certidumbre institucional y vocación integradora.

Un gran acuerdo nacional que refuerce nuestros consensos y vuelva a traer una ambición compartida de país. Hoy no existen las condiciones políticas para ese gran acuerdo, pero renunciar a proponerlo por falta de interlocutores sería ceder el espacio a quienes solo quieren debilitar el país desde los extremos. El Partido Popular quiere mostrar a los ciudadanos que hay un camino posible, que los problemas se pueden abordar con responsabilidad y sin rupturas, y manifiesta su voluntad de hacerlo en cuanto se reúnan las condiciones necesarias. La voluntad de cambios es, en sí mismo, el mensaje.

Más nación, menos nacionalismo. El nacionalismo nace del supremacismo y de una visión egoísta de la patria. Quien hace de sus diferencias una bandera no busca convivencia, sino privilegios y ruptura; quien reclama el derecho exclusivo a decidir sobre el destino de la nación no la considera un legado compartido, sino una propiedad particular. La realidad es que a los españoles nos une mucho más de lo que nos separa. España es una herencia común de más de 500 años de historia y que todos tenemos el deber de fortalecer y legar en mejores condiciones a las generaciones futuras.

Todas las fuerzas políticas de ámbito nacional debemos colaborar lealmente en la articulación de un Estado que defienda la unidad de la nación, dotado

de instrumentos suficientes para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. A tal fin, es preciso recuperar el delito de sedición y tipificar el referéndum ilegal en el Código Penal.

Se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, y con todos los que estén dispuestos a cumplirlas, a través de las reglas y de los procedimientos previstos en las propias normas. Creemos en el diálogo democrático y el diálogo es lo opuesto a la imposición, la ilegalidad, o el precio político al mantenimiento del poder.

El marco competencial no puede ser un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias. El núcleo de competencias indelegables del Estado en ningún caso puede estar sujeto a negociación. La garantía de la igualdad básica entre todos los españoles, la política exterior, la defensa, la inmigración, la Hacienda general, la administración de justicia o la Seguridad Social, entre otros, como competencias exclusivas del Estado son aspectos a preservar y reforzar. Asegurarlas dota al sistema de seguridad jurídica y estabilidad, además de impedir chantajes de formaciones separatistas. El Gobierno central no puede usar su poder para secuestrar los recursos que les corresponden a las comunidades, que deberían ser transferidos anual y automáticamente por ley.

Un Estado de las Autonomías racional y viable. Nuestro modelo de descentralización política está siendo gravemente dañado por la persistente actuación desintegradora del Gobierno y las minorías parlamentarias. No es sólo la incapacidad de pactar el esquema de financiación autonómico y local, es sobre todo la distribución de prebendas y la negociación de numerosos traspasos como condición previa a la segregación que algunos anhelan. Ningún sistema de reparto competencial territorial puede funcionar si no se garantiza la plena igualdad entre los ciudadanos que integran la nación y la lealtad entre las instituciones que dirigen las distintas administraciones. Igualdad, cooperación y lealtad institucional serán nuestros principios rectores para reconducir la actual deriva y recuperar, mediante la reforma, la negociación y el acuerdo, un sistema estable, justo y viable que articule con eficacia la diversidad con la indisoluble unidad de España.

Reafirmamos nuestro compromiso con el reconocimiento constitucional de las singularidades forales, como parte del marco institucional que ha permitido construir un proyecto común integrador y respetuoso con la diversidad territorial de España.

Recuperar y fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional es una condición esencial para garantizar la igualdad entre los españoles y la libertad de cada uno de ellos sin importar donde viva. De un tiempo a esta

parte, esa presencia se ha visto debilitada, llegando, en determinadas Comunidades Autónomas, a generar una sensación de desconexión y desprotección en muchos ciudadanos. Así pues, dotaremos adecuadamente de recursos humanos y materiales a las delegaciones, organismos y servicios públicos estatales, asegurando su visibilidad y su contribución al fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la confianza en el proyecto común. Asimismo, nos comprometemos a garantizar el respeto a los símbolos nacionales en todo el territorio nacional y a impulsar las reformas legislativas necesarias para que España cuente con la debida representación en las competiciones deportivas internacionales.

Una financiación transparente y equitativa. La inconsistencia del sistema de financiación autonómica, reconocida desde el mismo instante de su puesta en marcha, no ha hecho más que agravarse con el paso de los años. Es urgente aprobar un nuevo sistema que garantice una financiación suficiente, transparente y equitativa, que permita a las autonomías definir sus propias políticas tributarias dentro de una competencia leal y ser plenamente responsables de sus gastos. La solución debe ajustarse a la Constitución, ser coherente con la financiación local y establecer un marco estable y corresponsable para los próximos años. En todo caso, cualquier nuevo modelo de financiación debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la AIREF debe participar de su análisis, frente a bilateralidades que van en perjuicio de todos. Rechazamos cualquier privilegio económico en la reforma del sistema de financiación autonómica y local que rompa la caja común. Mientras no exista ese nuevo modelo, es necesario que se mantenga el Fondo de Liquidez para asegurar, en algunas comunidades autónomas, la calidad de los servicios públicos esenciales.

El municipalismo no es solo una forma de organización política; es una manera de ser y de entender la política: cercana, útil y centrada en las personas. Es gobernar desde la realidad, con conocimiento profundo del territorio, con responsabilidad y vocación de servicio. El municipio y la ciudad son un ámbito de encuentro y solidaridad cívica. Los alcaldes, concejales y representantes de entidades menores son el mejor ejemplo de esa política con rostro humano, sin intermediarios, basada en la escucha activa y en soluciones concretas. Un municipalismo fuerte necesita recursos y herramientas adaptadas a los retos actuales, capaz de liderar políticas en vivienda, sostenibilidad, digitalización, seguridad y empleo. Ha llegado el momento de repensar el papel de las diputaciones provinciales y los cabildos y consejos insulares: potenciar su papel, evitar duplicidades y transformarlas en herramientas eficaces al servicio

de los pequeños municipios, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Defendemos una financiación local moderna, no como reclamación, sino como garantía para ofrecer a los españoles los servicios de calidad que demandan. Una financiación basada en unos criterios objetivos y actualizados para la asignación de recursos, que reconozcan el peso de las competencias asumidas por los ayuntamientos y entidades locales. Porque el futuro de España también se construye desde abajo, desde cada pueblo y cada ciudad. Ese es el mejor antídoto contra la desconexión entre instituciones y ciudadanos: gobernar desde la calle, desde la experiencia y desde el sentido común, para que la política ejerza su auténtica vocación de servicio a las personas. Mantendremos la habilitación nacional de los secretarios e interventores de la administración como garantía de profesionalidad, transparencia y rigor.

El español es la lengua común de los españoles, que tienen el deber constitucional de conocerla y el derecho a usarla. Las lenguas de cada Comunidad Autónoma son un patrimonio cultural de todos los españoles que debemos amparar y, por eso, se defenderá la convivencia entre estas y la lengua oficial común. Garantizaremos el derecho constitucional de recibir enseñanza en español en todas las etapas del sistema educativo y en toda la nación, desde el respeto a las lenguas cooficiales de cada una de las comunidades y en cumplimiento de las sentencias judiciales.

La cordialidad entre las lenguas cooficiales y la lengua oficial común es muestra de la España capaz de convivir alrededor de un proyecto compartido desde la pluralidad. Los requisitos lingüísticos no pueden limitar las libertades en amparo de los derechos fundamentales de todos. Garantizaremos que las Administraciones de los territorios con cooficialidad se dirijan a los ciudadanos en la lengua oficial o en la cooficial, a elección del ciudadano. Blindaremos el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados y en los órganos de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno nacional y las Comunidades Autónomas y mantendremos la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales en el Senado.

La cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad. España es un país de tradiciones centenarias. Tenemos un acervo cultural inmenso que es reflejo de nuestra identidad y sin el que no se entienden la historia de Europa, de Occidente, de Hispanoamérica y el mundo. La cultura no debería depender de la política: por eso consideramos vital deshacer los límites ideológicos, la burocracia, la politización y la fragmentación nacionalista que se ha hecho de la cultura española. La cultura no solo nos define, también nos pertenece: el

acceso a ella es un derecho de todos los españoles, y debe garantizarse sin excepciones, censuras o barreras.

Apostamos por una cultura capaz de respetar su pasado, pero que también sea capaz de evolucionar para ser vanguardia. Entendemos que, para ser verdaderamente cultura, la creación debe ser libre, plural y respetuosa con los derechos de autor. La creatividad, el pensamiento y la expresión artística no pueden estar sujetos a censuras ideológicas ni a la amenaza de la cancelación: la cultura florece en la diversidad de ideas y no cuando está al servicio de la subvención. La promoción de la riqueza y el desarrollo cultural es tarea de las administraciones públicas, pero también una labor de mecenazgo, que conviene incentivar. Apoyaremos a las industrias culturales y a sus profesionales dentro y fuera de España. La tauromaquia es una expresión cultural con profundas raíces históricas y merece todo el respeto: defenderla es defender la libertad individual y el derecho a conectar con nuestras raíces sin imposiciones.

La política

La democracia no es sólo el gobierno de las mayorías, sino el respeto a las reglas que garantizan la libertad y la convivencia. No existe una voluntad nacional monolítica. España es una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley, que son plurales y su destino no puede quedar en manos de quienes pretenden arrogarse el derecho exclusivo de hablar en su nombre. El mandato democrático no es un cheque en blanco ni una excusa para arrasar el orden constitucional. Gobernar no es imponer, sino representar; no es dividir, sino unir. Frente a quienes reducen la democracia a una simple suma aritmética, reivindicamos un sistema basado en la separación de poderes, la protección de los derechos individuales y el respeto a la legalidad que garantiza que las instituciones trabajen para todos y no sólo para quienes circunstancialmente ejercen el poder.

Ni cordones arbitrarios, ni mayorías incoherentes. El socialismo actual lleva años queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático. Al tiempo que pacta con los que trabajan a diario para la fractura de España, pretende bloquear la formación de mayorías alternativas dando muestra de un tacticismo arbitrario. Hace ya mucho tiempo, desde el Pacto del Tinell de 2003, cuando las fuerzas políticas nacionalistas y de izquierdas acordaron una prohibición expresa de alcanzar acuerdos de gobernabilidad con el PP en Cataluña y toda España, los dirigentes socialistas renunciaron a buscar acuerdos amplios, vertebradores de la Nación, para ocultar su posición minoritaria. Su falta de compromiso con la estabilidad del sistema atenta contra los intereses de la gran mayoría de los españoles y desgasta nuestro sistema democrático. El PP

aspira a obtener un amplio respaldo ciudadano que le permita aplicar su programa. Para alcanzar el Gobierno, no vamos a renunciar a defender la nación, la Constitución y el interés general, ni entraremos en subastas políticas. La defensa del Estado, la Nación y el Orden Constitucional, serán objetivo irrenunciable de cualquier pacto de gobierno.

Memoria, verdad, dignidad y justicia. Nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo es consustancial a nuestra defensa de la democracia, la libertad y la vida. El Partido Popular – desde los horribles años de plomo a la etapa de socialización generalizada del sufrimiento- ha asumido un compromiso vital e inquebrantable con las víctimas y contra el terrorismo y sus herederos políticos, que hoy mantiene su total vigencia. Aprobaremos las reformas legales necesarias para que no puedan concurrir en las listas electorales aquellos que hayan cometido delitos de sangre y para que las víctimas del terrorismo dejen de ser humilladas por los asesinos con actos de homenaje o enaltecimiento del terror. Exaltar a los asesinos envilece la sociedad entera, premia el crimen y mina la acción de la Justicia. Para acceder al tercer grado penitenciario, será imprescindible la petición expresa de perdón, y la colaboración efectiva con la Justicia. No cejaremos en nuestro empeño de esclarecer la autoría de todos y cada uno de los atentados que ETA cometió. Derogaremos la mal llamada "ley de memoria democrática", corregida por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia -con los victimarios- desde la manipulación y el enfrentamiento.

Las instituciones y los poderes del Estado

La democracia y el Estado de derecho no se cuidan solos. Necesitan de instituciones sólidas, que se respete el imperio de la ley y que la moderación prevalezca sobre la exaltación. La democracia parte del respeto al adversario y a unas reglas del juego previamente convenidas a las que todos nos hemos sometido. Se pueden defender ideas sin considerar enemigo al adversario. Hay que institucionalizar el diálogo democrático, obligando por ley a un debate anual sobre el Estado de la Nación y un régimen periódico de reuniones entre oposición y Gobierno.

Defendemos la normalidad democrática frente a los excesos y los abusos. Creemos en la limitación institucional como garantía de un Estado democrático, donde las reglas se respeten y las instituciones no sean instrumentalizadas. Preservar el Estado es asegurar su independencia, su neutralidad y su servicio a todos los ciudadanos, sin concesiones a intereses partidistas. Es hora de

restaurar el equilibrio, la responsabilidad y el respeto a la legalidad. Rechazamos rotundamente el uso de recursos públicos para fines privados.

Vamos a reforzar el sistema de contrapesos políticos para garantizar que el ejercicio del poder en España no pueda volver a ser violentado. Las instituciones están al servicio de los ciudadanos y no son propiedad de ningún partido y ello debe reflejarse de una manera clara en nuestra Constitución. Su vocación de permanencia se salvaguarda si quienes las ocupan rechazan representar sólo a una parte y no reconocen más guía que el interés general. Ese es nuestro compromiso.

La corrupción es un delito y una fractura moral que crece y se expande allá donde el atajo se tolera y dónde se premia al que obedece y consiente sin preguntar. España no puede conformarse con excusas ni admitir que quien ostenta el poder no asuma su responsabilidad. Porque el poder sin responsabilidad es abuso, y donde hay abuso no hay igualdad ante la ley: unos mandan sin control y otros obedecen sin remedio. Cada euro del presupuesto público merece el máximo respeto y control de su destino, y su mal uso, el máximo reproche penal. Por eso, volveremos a endurecer las penas por malversación, repensar los requisitos de entrada y también de salida de los cargos y directivos públicos para que no sea una agencia de colocación por mera afinidad, y aumentar la exigencia en el cumplimiento de objetivos para garantizar la excelencia y la transparencia en el servicio público.

El indulto no volverá a ser un privilegio político. Reformaremos su regulación para asegurar que no pueda concederse de forma arbitraria, estableciendo criterios claros y objetivos que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Prohibiremos expresamente su aplicación en delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores. Además, cuando se trate de personas que ocupen o hayan ocupado responsabilidades políticas, exigiremos una tramitación reforzada, que incluya al menos la autorización por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados. Promoveremos un mejor acceso de los ciudadanos a las cuentas y contratos de las administraciones públicas.

El Parlamento debe recuperar su función como elemento central de la política en nuestro país, su prestigio y sus funciones. Tenemos que mejorar el procedimiento legislativo, eliminando la posibilidad de enmiendas intrusas y dilaciones injustificadas en la tramitación; limitar al máximo el uso de procedimientos extraordinarios y velar por los derechos de todos los representantes políticos para que puedan desarrollar su labor con autonomía.

Las normas con evidente trascendencia constitucional, particularmente en el ámbito de la Justicia, deben ser informadas siempre por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y cuantos órganos independientes sea aconsejable con el fin de asegurar un debate técnico riguroso, la transparencia del proceso legislativo y las garantías propias de un Estado de Derecho. No es aceptable que en una democracia parlamentaria el Gobierno de la Nación no presente un proyecto de presupuestos, sin que ello tenga consecuencias. Haremos todos los cambios normativos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir.

Replantear el papel del Senado. No basta con declarar la culminación de su transformación como verdadera Cámara de representación territorial: hay que dotarlo de verdaderas competencias, como el derecho de veto legislativo en asuntos que afecten especialmente a las Comunidades Autónomas, para que trabaje con independencia por las regiones, de forma complementaria a la labor del Congreso. También proponemos reforzar su función de fiscalización y control al Gobierno, a través de mecanismos normativos para que el presidente del Gobierno acuda a la sesión de control con carácter mensual y sus ministros deban justificar suficientemente las ausencias.

La independencia judicial es intocable y no puede estar sometida ni a los vaivenes políticos ni a las presiones de ningún Gobierno. Una justicia independiente es la primera garantía de que se cumplirá el mandato constitucional de separación de poderes y de igualdad de todos los españoles ante la ley. La justicia la imparten los jueces, con total independencia, con acreditada profesionalidad y con sometimiento al imperio de la ley. Modificaremos las leyes para garantizar que el Tribunal Constitucional no vuelva a actuar como tribunal de casación del Tribunal Supremo y para que el procesamiento del Fiscal General del Estado conlleve su cese inmediato y automático.

Pondremos fin a todas las prácticas que utilizan a los tribunales de Justicia, a los jueces, y a los fiscales con fines partidistas. Revertiremos la colonización política de las instituciones y, muy singularmente, acabaremos con la colonización de la Justicia, limitando que jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos puedan volver a ejercer funciones jurisdiccionales durante los dos años siguientes. Defendemos la modificación del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. Nos comprometemos a defender con firmeza la acusación popular frente a cualquier intento de eliminarla o debilitarla, porque protegerla es hoy proteger la libertad, el Estado de derecho y el derecho de los ciudadanos libres a hacer respetar el interés general. En momentos como los actuales, los magistrados,

jueces, fiscales y todo el personal de la Administración de Justicia sostienen con valentía nuestra democracia, defendiendo incansablemente la verdad y garantizando la vigencia de los derechos fundamentales frente a cualquier intento de erosión del orden constitucional.

Reconocemos y reivindicamos el incuestionable papel que la monarquía ha desempeñado como símbolo de la unidad de España y de representación del Estado. Defendemos el legado de respeto, consenso y convivencia generado en la Transición y que nuestra Constitución ha recogido en la Monarquía Parlamentaria como forma idónea de estabilidad, pluralidad y prosperidad.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y los funcionarios de Instituciones Penitenciarias merecen todo nuestro agradecimiento y respeto por la impagable labor que realizan para garantizar que podamos ejercer nuestra libertad con seguridad. Es inaceptable la desatención y el desprestigio que hoy padecen por todas las maniobras políticas dirigidas hacia el deterioro de las instituciones que dan sentido a España como nación. Creemos que su autoridad debe fortalecerse como pilar imprescindible de nuestro Estado de derecho, asegurando su permanencia por todo el territorio nacional.

Garantizaremos la neutralidad de los presidentes, directores y responsables de organismos independientes del Estado como el Consejo de Estado, Banco de España, Defensor del Pueblo, CNMC, CNMV, CIS, Tribunal de Cuentas, entre otros. Aseguraremos que no hayan ocupado puestos como cargo electo, miembro de gobiernos o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial en los últimos cinco años. Más allá del control parlamentario ordinario, deberán comparecer en el Congreso con carácter previo a su nombramiento.

Es imprescindible afrontar la reforma de la Administración. La Administración pública se enfrenta a tres grandes retos. El primero es la jubilación de miles de efectivos en los próximos años, que debe ser aprovechada para una verdadera modernización de los órganos públicos, mediante oposiciones basadas en el mérito y la capacidad, convocatorias públicas y con medidas para combatir la interinidad. El segundo es la incorporación de la tecnología, que nos puede permitir reducir el exceso de burocracia y acortar los tiempos de respuesta, pero también nos exige ser capaces de garantizar la atención personal a quien lo necesite. Y, finalmente, las crecientes demandas de eficiencia, que debemos alcanzar optimizando procesos y simplificando gestiones, pero sin renunciar nunca a las garantías y al control de legalidad.

Desinformación y libertad de expresión

Los medios de comunicación libres son un contrapeso fundamental del poder. La información debe ser veraz regirse por las reglas de la libre competencia, sin interferencias que favorezcan a unos medios sobre otros. Cuando el Estado interviene para influir en el flujo informativo, ya sea mediante subvenciones selectivas, regulaciones arbitrarias o mecanismos de control, no sólo excede sus atribuciones, sino que erosiona el pluralismo y la libertad de prensa. Ninguna autoridad política puede estar por encima del código deontológico de los periodistas. Por eso, llevaremos a cabo todas las actuaciones necesarias para asegurar la independencia de RTVE y de todos los medios de comunicación públicos.

La ciudadanía no es audiencia, son sujetos adultos y responsables. En una sociedad libre, la verdad no se impone desde el poder, sino que emerge del debate libre y abierto y el juicio crítico. La desinformación no se combate con censura ni con mecanismos de control estatales, sino con más información y transparencia. Tratar a los ciudadanos como una audiencia pasiva a la que hay que proteger de determinadas ideas es una forma de menospreciar su capacidad de juicio. Rechazamos cualquier intento de manipulación informativa.

Libertad y Seguridad

En el Partido Popular creemos que la primera razón de ser del Estado es la seguridad. La seguridad física y, también, la jurídica. Si el Estado falla en garantizar la seguridad de la gente, pierde su legitimidad. La ley existe para protegernos de otros que quieren imponerse o violentar nuestros derechos y nuestra libertad. Evitar esa situación es la tarea principal del Estado.

Necesitamos una reforma profunda de nuestro modelo de seguridad. El crimen organizado ha evolucionado más rápido que nuestra legislación y la capacidad de nuestros cuerpos policiales. Hay que dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios, la tecnología y el respaldo legal necesarios para combatir el crimen. Se acabaron las trabas burocráticas que frenan la acción policial: el trabajo de campo debe primar sobre la gestión administrativa, los resultados deben reconocerse y premiarse, y las zonas de alta criminalidad —especialmente las golpeadas por el crimen organizado— deben recibir refuerzos inmediatos. España no puede ser un lugar fácil para el crimen por culpa de una legislación desfasada y una respuesta tibia. Nos

comprometemos con una legislación nacional que endurezca las penas en los casos de multirreincidencia, por ejemplo, para convertir en delito de robo el hurto continuado.

Y un nuevo modelo migratorio, porque no hay política migratoria más inhumana que la que no existe. España carece de cauces legales realmente efectivos para la gente que quiere venir a trabajar. Llevamos años sin ejercer un control eficaz sobre la inmigración ilegal, con fronteras desprotegidas y un sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas y a miles de migrantes a incumplir la ley. Es urgente establecer vías de entrada legal y ordenar la entrada de personas, primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores. El inmigrante no debe ser estigmatizado, porque no es ni víctima ni verdugo, sino una persona digno y libre, titular de derechos y también responsable de obligaciones como cualquier ciudadano. Es la administración competente en esta materia, es decir, el Gobierno central, quien debe asumir las consecuencias del descontrol migratorio. Asimismo, y ante la excepcionalidad de la emergencia en las Islas Canarias y Ceuta, es el Ejecutivo central quien debe asumir la atención y financiación directa de los menores no acompañados en estas situaciones críticas.

Contribuir tiene que ser condición para permanecer. Eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, porque la irregularidad no puede generar derechos, y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas. Recibir prestaciones asistenciales no puede generar por sí mismo el derecho a residir legalmente en España. Además, devolveremos al arraigo y la reagrupación familiar su carácter excepcional porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares sobre la que el Estado apenas ejerce control. Tolerancia cero con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no se quieren integrar y respetar nuestra cultura, particularmente el rol de la mujer de la sociedad.

El control de fronteras no es ni un capricho ni una amenaza: es la garantía de la convivencia en libertad. Es imperativo trabajar directamente en los países de origen para fortalecer el control fronterizo, luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito: en España las leyes se cumplen y los derechos

son respetados. No podemos permitir que terceros países traten de utilizar la inmigración como arma para desestabilizar nuestra economía y nuestra sociedad. La inmigración es, también, una cuestión de Seguridad Nacional. El control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado.

POLÍTICA SOCIAL

El proyecto político de un gobierno no puede ser levantar un muro que divida socialmente a los españoles. El gran 'nosotros' que alumbraron la Transición y la Constitución del 78 se ha ido fragmentando en sujetos cada vez más pequeños, y a cada uno se opone siempre un 'ellos'. Donde antes había ciudadanos libres e iguales, ahora hay identidades contrapuestas y ensimismadas. Se ha promovido el enfrentamiento entre los trabajadores y los empresarios, los mayores y los jóvenes, los hombres y las mujeres, la ciudad y el campo, lo público y lo privado, el presente y el pasado.

Debemos derribar el muro y poner en marcha un verdadero proyecto social de país. Uno que ponga a los ciudadanos en el centro, porque las ayudas económicas son muchas veces necesarias, pero nunca suficientes. Uno que ofrezca una ambición común de futuro que no hipoteque a los jóvenes engordando de forma irresponsable la deuda pública. Uno en el que los verdaderos protagonistas sean los que echan cuentas antes de llenar el carro de la compra.

Necesitamos una España en la que se hable menos del pasado y más del futuro. Donde los impuestos no sean una losa y la fiscalidad premie el trabajo, recompense el esfuerzo y facilite el ahorro. Tenemos que dejar de exigirle al autónomo que sea un héroe o al trabajador, sobre todo si es joven, que sea precario. Y evitar que la educación sea una herramienta de adoctrinamiento político y se convierta en un instrumento al servicio de la igualdad de oportunidades, de la transmisión de valores compartidos y de la promoción del talento.

En tiempos de polarización, la cordialidad es el mejor acto de rebeldía. Una ciudad, un pueblo, son aún más grandes cuando saben crecer conservando en su corazón el sentido de comunidad que un día fueron. Y ningún individuo es una isla: es un compatriota, un conciudadano, un vecino. Es uno de los nuestros.

Vamos a demostrar que la acción política es una herramienta formidable que, bien usada, sirve para mejorar la vida de las personas, para hacer del nuestro un gran país.

La familia: nuestra prioridad

Defendemos la familia sin dogmatismos. Porque es la primera red de apoyo y cuidados, una eficaz escuela de respeto y valores, y el más potente vehículo de transmisión cultural. Y, frente a quienes atacan a la familia y quieren sustituir su papel por la intervención del Estado, nosotros afirmamos que es una institución imprescindible para la sociedad, que seguirá evolucionando, sin perder su esencia: familia es la que cada uno forma libremente, como cada uno elige, para desarrollar su propio proyecto vital.

Creemos que la natalidad debería ocupar un lugar central en la agenda política. Se nos dice que las familias son espacios opresivos, los hombres un enemigo en potencia y los hijos un freno para el empoderamiento femenino. Vamos a desmentir estos dislates y reivindicar la familia, como base de la sociedad, porque eso es, también, hacer políticas de natalidad.

Cualquier mujer que quiera ser madre o tenga dudas, sobre todo si es joven, debe ser ayudada. Vamos a defender la vida. Miles de españoles no pueden formar una familia porque las circunstancias económicas, políticas e, incluso, sociales se lo impiden. El periodo formativo cada vez es más largo, la gran precariedad laboral de los jóvenes, su expectativa de crecimiento profesional, una emancipación muy tardía, y un escaso apoyo a la crianza generan una fuerte incertidumbre sobre el futuro, que provoca un desfase entre el reloj biológico y el reloj social. Cualquier mujer que quiera ser madre o tenga dudas, debe ser ayudada. No tener un hijo no puede ser una cuestión económica. Debemos poner en marcha medidas que favorezcan que las personas puedan tener el número de hijos que desean y en el momento que quieran, y que faciliten el progreso personal y profesional, como la congelación de óvulos para las mujeres jóvenes. Creemos en un sistema de apoyo capaz de tener en cuenta las necesidades concretas de cada familia —desde las monoparentales hasta las numerosas—, ofreciendo respuestas flexibles, justas y respetuosas con su libertad y su forma de vida, desde el punto de vista fiscal, de conciliación, de prestaciones sociales y apoyo comunitario. Creemos que el concebido no nacido debe ser tomado en consideración para acceder a beneficios familiares.

Queremos prestigiar la maternidad y reivindicar el papel fundamental del padre. Es cierto: las mujeres con hijos tienen mayor dificultad para encontrar empleo y para mantenerlo, están sobrerrepresentadas en los empleos a tiempo parcial y solicitan la gran mayoría de las excedencias por cuidado de hijos. Faltan herramientas que favorezcan la conciliación y, habitualmente, uno de los progenitores tiene que acabar renunciando a parte de su desarrollo profesional. Sin embargo, la solución a este problema pasa por crear más mecanismos de

apoyo que favorezcan un reparto libre y justo de las responsabilidades familiares entre los progenitores, entre ellas, la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, las facilidades para quienes deciden cuidar a sus hijos en casa, o ayudas para la contratación de apoyo familiar. Además, durante los últimos años se ha obviado que muchos hombres quieren y deben poder formar parte activa de la crianza sin ser tratados como actores secundarios. La masculinidad no es una condición negativa: reivindicar el papel del padre es también defender su presencia y su implicación como pilares necesarios para el equilibrio familiar y para el bienestar de los hijos.

Reconocemos el inmenso esfuerzo que hacen las familias con personas con discapacidad, dependientes y enfermos graves a su cargo. Tenemos que ser capaces de asegurar la calidad de los cuidados en el hogar y dar mayor valor social al trabajo no remunerado: nadie debería verse obligado a renunciar a su empleo o a su bienestar por falta de apoyos en esta tarea. Vamos a transformar la dependencia para que esté correctamente financiada y se convierta en un sistema de cuidados digno, accesible y humano, donde todas las familias sepan que no están solas, y donde cuidar a quien lo necesita no signifique sacrificarlo todo. Las personas con discapacidad deben tener garantizados los apoyos personalizados necesarios, desde las primeras etapas de la vida, para poder construir su propio proyecto vital. Garantizaremos la atención temprana a los menores y evitaremos la institucionalización de la dependencia y la discapacidad, cuando sea posible y lo elija la familia, con programas de ayuda a domicilio, asistencia personal y teleasistencia. El 50% la dependencia será financiado por el Estado.

Queremos una España en la que todas las familias puedan salir adelante. La libertad y la igualdad de oportunidades solo son reales cuando existen unas condiciones mínimas que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida con dignidad. Hoy, millones de ciudadanos —especialmente muchas familias numerosas y monoparentales— viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Debemos impulsar un marco de prosperidad económica que sirva al bienestar de todos: que premie el esfuerzo, reconozca el valor del trabajo y apoye a las familias como base de la cohesión social. Necesitamos un sistema de acompañamiento sociolaboral eficaz, centrado en la emancipación económica, el acceso al empleo y la ruptura de los círculos de pobreza heredados.

La vivienda: un bien accesible

Ningún español sin casa. La vivienda es condición fundamental para poder construir un proyecto de vida. Para echar raíces y formar una familia. Para ser libre. Hoy miles de ciudadanos se desconectan de sus instituciones al ver que éstas no son capaces de garantizar las condiciones mínimas para que ellos puedan formar un hogar o incluso agravan el problema con normativas intervencionistas condenadas al fracaso. Creemos que el acceso a una vivienda debe ser el resultado de una decisión libre y responsable de cada ciudadano.

Sabemos lo que hay que hacer para afrontar esta emergencia nacional. Hay que ampliar el suelo edificable, producir con rapidez suelo finalista, preparado para obtener licencias, eliminar burocracia, reducir impuestos —muy en especial a los jóvenes—, facilitar el acceso a la hipoteca, generar incentivos para que los pisos vacíos se pongan en alquiler con seguridad jurídica y acelerar la construcción de nuevas viviendas para aumentar rápidamente la oferta disponible. La Unión Europea debe seguir dotando fondos para promociones inmobiliarias que garanticen alquileres asequibles. Debemos impulsar un programa especial de formación en los oficios vinculados a la construcción, apostar por la industrialización, movilizar suelo e inmuebles públicos en desuso para vivienda asequible, y convocar a las empresas a un gran proyecto de colaboración con el sector público para aumentar el número de inmuebles disponibles en el mercado. Estableceremos el criterio de silencio administrativo positivo para la obtención de licencias de edificación para inmuebles de nueva construcción y rehabilitación de inmuebles, excepto las que tengan algún tipo de protección ambiental, patrimonial o histórica. Debemos potenciar la rehabilitación de nuestro parque de vivienda, que está envejecido, ofreciendo ayudas que tengan el mismo tratamiento fiscal con independencia de la Administración que las conceda.

La ocupación y la inquilinación son una anomalía en Europa. La propiedad privada es la mayor garantía de libertad. No podemos acostumbrarnos a que las viviendas sean ocupadas, a que las rentas acordadas se dejen de pagar con el amparo del Estado y no haya posibilidad de desalojo inmediato en caso de incumplimiento contractual. Nuestra prioridad es devolver la seguridad jurídica a la propiedad privada y acabar con estos comportamientos incívicos endureciendo las penas, impidiendo a los ocupas empadronarse y haciendo que el desalojo sea inmediato. La atención prioritaria a las víctimas, el apoyo a los propietarios, la defensa del patrimonio público, que es de todos, deben ser ejes de una defensa real de la propiedad. Somos conscientes de la dura realidad que sufren las personas sin hogar y el miedo de aquellos que están en riesgo de perderlo. Su situación debe ser afrontada desde la colaboración público-privada

y el Tercer sector, con el trabajo coordinado de los sistemas sanitario, educativo, de empleo y servicios sociales.

Educación: libertad, calidad y responsabilidad

Debemos formar ciudadanos libres y responsables a los que nadie regale nada, que conozcan su pasado y sus raíces, que sepan que la democracia está en sus manos y no está garantizada, y que se mantengan bien preparados e informados para construir un futuro próspero en libertad. Educar es formar para decidir, no para obedecer: hay que eliminar radicalmente el sectarismo y el adoctrinamiento ideológico de las aulas y educar; ciudadanos, no súbditos.

Defendemos un sistema educativo exigente. Un modelo basado en la excelencia académica, que permita hacer realidad la igualdad de oportunidades. Tenemos que luchar contra la mediocridad, defender la cultura del esfuerzo y dar la batalla contra las propuestas de la izquierda que fomentan el aprobado general. Cuando se baja el nivel de exigencia los alumnos salen perjudicados, especialmente los más vulnerables, para los que se deben diseñar sistemas de apoyo eficaces, que no tendrán oportunidad de obtener por otras vías una formación de calidad. España está por debajo de los países más desarrollados de la OCDE en todas las pruebas internacionales, especialmente en matemáticas y comprensión lectora. Nos proponemos eliminar esta brecha educativa en los próximos diez años, fijando nuevos estándares nacionales de excelencia, con inversión en infraestructuras educativas, tutorías y apoyo al profesorado y a su formación permanente y recuperando un currículo exigente, en el que los contenidos esenciales sean comunes en toda España.

La igualdad no consiste en generalizar una educación deficiente para todos. La verdadera igualdad de oportunidades se alcanza cuando se generaliza que todos puedan aspirar a la excelencia, al éxito y a las más altas cotas de progreso. Debemos gestionar la oportunidad que plantea la tecnología, particularmente la Inteligencia Artificial, sin que ello mine el pensamiento crítico o sustituya el esfuerzo de los alumnos, manteniendo la esencia de la educación humanística; la internacionalización, sin olvidar la transmisión de mil años de cultura en español; el deterioro de los resultados académicos de los varones frente a las mujeres; la epidemia de las drogas, la adicción a las pantallas, el aumento de situaciones de acoso escolar, y las amenazas a la libertad de pensamiento y expresión, con la manía persecutoria de la cancelación.

La igualdad de oportunidades sólo es alcanzable desde una educación pública bien diseñada y orientada al largo plazo. Además, es un mecanismo que se retroalimenta. Si las personas perciben que hay igualdad de

oportunidades a través de la educación y que es el factor principal que determina el bienestar y los salarios futuros, entonces habrá más incentivos a formarse, lo que a su vez puede revertir en la construcción de una sociedad más justa, próspera y meritocrática. En esta labor, reconocemos el papel esencial de la familia y del maestro en la formación de los alumnos.

Creemos que son los padres quienes deben decidir sobre la educación de sus hijos, así como sobre su formación moral o religiosa, tal y como dispone la Constitución. Además, los directores de los centros deben contar con capacidad real para gobernarlos, los profesores asumir la importancia de su labor y los alumnos esforzarse por aprender. Creemos en la libertad y, por eso, además de reforzar la educación pública, protegeremos, siempre, las enseñanzas concertada y especial -integrando todas las capacidades- y el derecho a optar también a una educación privada.

Las oportunidades y la competitividad surgen de una educación superior de excelencia, ya sea formación profesional o universitaria. El 'café para todos' la falta de equidad y criterios comunes, la escasa especialización y su correspondiente vínculo con el tejido social y económico lastran la aportación de las universidades al futuro de España. Necesitamos favorecer un ecosistema universitario que corrija las desigualdades, fomente la excelencia, y atraiga talento internacional. Es urgente hacer más justa la entrada a la educación universitaria en toda España, respetando la pluralidad lingüística, cultural y educativa de las diferentes Comunidades Autónomas, con una prueba de acceso común en exigencia y criterios de calificación; aligerar la burocracia que convierte a profesores e investigadores en gestores administrativos y eliminar los rígidos procedimientos que impiden la competitividad de las universidades. La libertad de elección y la movilidad de los estudiantes deben venir acompañadas por sistemas de transparencia, rendición de cuentas y empleabilidad.

Protegeremos la universidad pública como una pieza clave de un sistema universitario plural y de calidad. Además, defenderemos la universidad privada para que ambas realidades sigan contribuyendo a la excelencia académica a través de proyectos innovadores, una estrecha conexión con el mundo profesional y una clara vocación internacional. La libertad de cátedra y la autonomía universitaria permiten a nuestros centros desarrollar modelos educativos ágiles, plurales y adaptados a los retos de una sociedad en constante cambio. Un entorno de sana competencia impulsa al conjunto del sistema universitario, público y privado, a generar talento y empleo de calidad.

La Formación Profesional no es el plan B: cumple una función propia e insustituible. Es el motor de miles de empresas. Forma rápido, responde al mercado y es un camino ágil al empleo de calidad. Es un ascensor social que funciona. No solo defendemos la Formación Profesional, sino que la vamos a prestigiar, potenciar y adaptar con las oportunidades que ofrece la tecnología. Impulsaremos una Formación Profesional dual de calidad, y lo haremos de la mano de las empresas, escuchando las necesidades del tejido empresarial en cada región.

La infancia

Un país en el que no nacen niños es un país que se muere. La baja natalidad es un problema enorme que, inexplicablemente, es ignorado cada día en la agenda pública. Impera un discurso político que, amparado en versiones extravagantes del ecologismo o el feminismo, buscan convertir la maternidad y la paternidad en algo sospechoso o directamente reaccionario. Frente a esto, nosotros defendemos sin complejos el derecho de los niños a vivir en familia y la importancia de su desarrollo vital en hogares.

Los niños deben crecer en un entorno seguro, libres de dogmatismos ideológicos que persigan moldear su identidad o imponerles una determinada forma de ver el mundo. Garantizar su bienestar implica respetar la infancia como una etapa fundamental de crecimiento en la que se debe evitar cualquier interferencia externa que pueda distorsionar su percepción de la realidad. Al mismo tiempo, garantizar su bienestar requiere una educación en valores que fomente el respeto y la empatía, claves para prevenir el acoso escolar y construir entornos seguros donde cada niño pueda crecer en libertad.

Creemos que la familia es el entorno natural y más adecuado para el desarrollo integral de los niños, especialmente en las etapas más temprana de su vida. Los menores necesitan el calor y la estabilidad que solo una familia puede ofrecer. Es imprescindible que nuestro país incentive el desarrollo vital de los menores en hogares, evitando en todo lo posible la ruptura de vínculos familiares en situaciones de riesgo. Apoyaremos a las familias acogedoras y adoptantes, les daremos respaldo y reconocimiento allá donde gobernemos y concienciaremos a la sociedad sobre el valor insustituible de crecer en un entorno familiar. **Los menores deben ser protegidos frente a decisiones irreversibles sobre su cuerpo y su identidad sexual.** En una etapa del desarrollo marcada por las dudas, pueden llegar a conclusiones erróneas con graves consecuencias. Es fundamental retrasar al máximo cualquier tratamiento de cambio de sexo, para que este tipo de decisiones se tomen sólo con plena madurez y con el acompañamiento psicosocial y médico adecuado.

El acceso de los menores a Internet y las redes sociales debe estar sujeto a un mayor control. El uso excesivo de estas plataformas puede generar hábitos adictivos y afectar gravemente su salud mental, además de exponerlos a riesgos como el ciberacoso o el *grooming*. Es necesario establecer límites claros y, si es preciso, restringir su acceso para garantizar la seguridad y evitar contenidos inadecuados que puedan suponer un riesgo para su salud mental. Las familias deben saber que cuentan con la corresponsabilidad de las administraciones y del sector tecnológico para no verse solas ante la presión social en esta materia.

Juventud: hemos entendido el mensaje

Menos censo, más futuro. Uno de los principales efectos del envejecimiento de la población es que durante muchos años se ha hecho política mirando más al censo electoral que al futuro, y es prácticamente imposible que un proyecto de país triunfe si no se piensa en quienes van a vivir sus consecuencias. Es difícil que los jóvenes se identifiquen con el sistema si el sistema se ha desentendido de ellos, por lo que nuestra prioridad ahora es hacerlos parte y motor de una ambición nacional: cambiar España.

Para los jóvenes hay menos oportunidades. Sí, ahora tienen más opciones, pero menos oportunidades. Pueden viajar más lejos y con más frecuencia, estudiar fuera, tener diferentes domicilios y trabajos. Pero la realidad es que se ha invertido el progreso, porque, a diferencia de generaciones anteriores, no está nada claro que puedan llegar a vivir mejor que sus padres. La solución no pasa por enfrentar a generaciones ni por culpar a quienes han construido con esfuerzo el bienestar del que hoy disfrutamos. La clave está en que las administraciones asuman un compromiso político y económico sin precedentes que permita a los jóvenes iniciar un proyecto formativo, laboral o familiar con garantías, y que, una vez en marcha, ese proyecto dependa únicamente de su talento, su trabajo y su responsabilidad.

Menos cargas, más protagonismo y mayor libertad con responsabilidad. Tenemos la obligación moral de trabajar para que los jóvenes puedan alcanzar un futuro de prosperidad. La juventud española tiene el ímpetu y la fuerza para ser protagonista del proceso de reformas y transformación que España necesita, sacando el máximo provecho al capital humano que atesoran. Las políticas para la mejora en la formación, capacitación e inserción laboral serán claves para permitir que sean los jóvenes quienes den continuidad, en un mundo cada vez más competitivo y global, al modelo de éxito y prosperidad que las generaciones anteriores iniciaron.

Ni trabas ni culpas: Igualdad real

Esto va de personas. Entendemos la política como una actividad al servicio de la gente; por eso no hacemos distinciones ni enfrentamos a nadie: la mejor forma de defender la diversidad es respetar a la persona, su autonomía y su libertad, con independencia de la raza, el credo, la opinión, el sexo o la orientación sexual. Rechazamos la colectivización y la instrumentalización de la orientación sexual ni ninguna otra condición por parte de nadie. Lo personal no es político. Trabajaremos para que la diversidad sea un valor y no un elemento de conflicto o marginación. Nunca dejaremos de combatir la LGTBIfobia, ni cualquier otro tipo de delito de odio.

Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres. Frente a las agendas que dividen y disuelven la comunidad, defendemos una igualdad plena y efectiva entre todas las personas. Este objetivo no se logra enfrentando a los ciudadanos con ideologías, sino legislando con rigor y poniendo en marcha políticas que garanticen las mismas oportunidades y derechos y eliminen las trabas que todavía nos alejan de la igualdad real.

La igualdad ante la ley, junto con la dignidad de toda vida humana y la legalidad, deben guiar nuestra respuesta ante el drama de la inmigración irregular. Miles de personas, condenadas por su origen a la falta de oportunidades y vías legales, son usadas por mafias que comercian con su desesperación, arriesgando y perdiendo sus vidas en el mar. Es urgente una política migratoria firme, legal y segura, que proteja a los más vulnerables y frene esta tragedia. Solo con un enfoque justo y ordenado podremos garantizar una integración humana y real basada en el respeto y en valores compartidos.

Ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilizan u oprimen a la mujer. El uso del *burka* o el *niqab* suponen una negación simbólica y práctica de su libertad y colisionan con principios superiores como la seguridad y el cumplimiento de la ley. Frente a esto, reivindicamos los valores de dignidad, autonomía y plena participación de la mujer en el espacio público, principios esenciales de nuestra democracia.

Estamos en contra de los discursos que infantilizan a la mujer: no se trata de pasar de la primacía del hombre a la primacía de la mujer, porque ello puede derivar en que haya quien quiera desandar los verdaderos avances en igualdad. Es una cuestión de justicia y libertad.

Condenamos toda forma de violencia, especialmente la violencia machista y la ejercida contra los niños. Nuestra respuesta será firme: endureceremos las penas y aplicaremos la prisión permanente revisable para los reincidentes. Y lo haremos sin criminalizar a los hombres por el mero hecho de serlo: la justicia

consiste en juzgar a los culpables, no en condenar a los inocentes. Hay que ser implacables con las denuncias falsas.

Nos preocupa el incremento de los delitos cometidos contra la libertad sexual de las mujeres y creemos que es imprescindible mejorar la regulación de los tipos y las penas, tras las defectuosas reformas parciales acometidas como la Ley de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley del Solo Sí es Sí), que ha rebajado más de mil doscientas condenas a violadores y pederastas condenados en España y excarcelado a más de doscientos, revictimizando a miles de mujeres. Mujeres y menores deben ser protegidos, además, de la trata con fines de explotación sexual, que es la esclavitud del siglo XXI.

La igualdad no consiste en negar la realidad biológica, sino en garantizar las mismas oportunidades y derechos para cada persona. La autodeterminación de género que actualmente recoge la legislación profundiza en el borrado de las mujeres y provoca una profunda inseguridad jurídica. En las competiciones deportivas femeninas, el sexo biológico es el que debe ordenar las categorías.

Cuidar a quienes nos cuidaron

Mayores, no viejos. Garantizaremos un sistema de pensiones sólido y viable, con la convicción de que la generación más numerosa merece mucho más que una simple prestación económica. Los españoles cada vez vivimos más años. Sin embargo, también vivimos más solos y nos sentimos más solos: los poderes públicos deben acompañar a los mayores en sus proyectos personales y luchar contra la discriminación por razones de edad. Queremos un país que valore y tenga en cuenta a los mayores y a los abuelos, que aproveche su experiencia y su capital humano; que fomente el envejecimiento activo y saludable, fortalezca su aportación a la comunidad y ofrezca soluciones para combatir la soledad no deseada. Reivindicamos el talento senior como un activo estratégico de nuestro país.

Están preocupados por el futuro de los suyos. Han vivido crisis, transiciones, reconstrucciones; saben lo que es empezar de nuevo, lo que cuesta sostener una familia y un país en pie. Necesitamos su mirada serena, su memoria crítica, su capacidad para distinguir lo esencial de lo pasajero. Integrarlos en los debates sociales y en este nuevo empeño transformador de nuestro país, no es solo un acto de justicia: es una apuesta inteligente por una sociedad que aprende de su pasado para construir un futuro más sólido.

Una sanidad que trata, cura y previene

Reafirmamos nuestro compromiso con la calidad asistencial y la viabilidad económica del Sistema Nacional de Salud como pilar público fundamental.

Su sostenibilidad depende tanto de más recursos, como de una gestión eficiente, corresponsable y abierta a la innovación. Por eso defendemos un modelo que garantice la equidad en el acceso, promoviendo al mismo tiempo la libertad de elección del ciudadano, viva donde viva, con una asistencia sanitaria accesible y de calidad en todo el territorio.

Vivir con salud. Estamos convencidos que los avances científicos nos van a permitir vivir con calidad muchos más años. Lograr que esta oportunidad llegue a todos requiere mirar con ojos distintos a nuestro sistema de salud, y avanzar en un conjunto de reformas profundas que lo modernicen, especialmente en lo relativo a la medicina personalizada. Estas reformas deben abordar de manera integral tanto la salud física como la salud mental, garantizando un enfoque preventivo, multidisciplinar y accesible en todo el territorio.

Modernizar el sistema sanitario. Nuestros hábitos de vida determinan nuestra salud mucho más que cualquier sistema sanitario. Modernizar el sistema sanitario significa hacer a los ciudadanos protagonistas de su propia salud e invertir en prevención. Es impulsar la investigación e incorporar plenamente la innovación, no sólo en productos o en medicamentos, sino sobre todo en procesos diagnósticos y formas de organización. Y aplicar esas innovaciones de forma planificada en todo el sistema público de salud para garantizar que lleguen a todos.

Sin profesionales no hay atención, y sin atención no hay sanidad. España necesita más profesionales sanitarios, pero, sobre todo, necesita un Gobierno que garantice que se queden, que les respete y que apueste, de verdad, por la sanidad. No basta con formar profesionales si luego se enfrentan a la precariedad, la sobrecarga y la falta de reconocimiento. Necesitamos políticas que garanticen estabilidad laboral, condiciones dignas y una carrera profesional atractiva, también en el medio rural. Debe impulsarse una verdadera planificación de recursos humanos para las próximas décadas, que empiece por ampliar las plantillas y, una vez asegurado, permita abordar necesidades incuestionables como la reducción de las guardias de 24 horas.

Las profesiones sanitarias no son profesiones burocráticas. La vocación de los médicos, enfermeros y el resto del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud es cuidar, ayudar y acompañar, no pasar su tiempo frente a una pantalla. Las nuevas tecnologías permiten reducir la carga administrativa y devolverles el

tiempo que necesitan para atender a sus pacientes. Sólo así podemos garantizar que se dediquen a lo que realmente importa.

Hay que defender la vida. Escogemos la cultura de la vida, que es digna siempre, porque cada persona es única e insustituible, tenga salud o esté enferma. Por eso garantiremos los cuidados que sean necesarios a quienes más lo necesitan hasta el último suspiro. Nos comprometemos con un sistema de cuidados paliativos mejor dotado y humanizado.

POLÍTICA ECONÓMICA

Queremos que España recupere la confianza y la seguridad en el futuro. Muchos españoles —especialmente los jóvenes— ven con pesimismo el futuro.

Detrás de los grandes números de nuestra economía hay dos Españas, y para una de ellas se ha quebrado el horizonte de prosperidad. El coste de la vida se ha disparado y cada vez más españoles en nuestro país sienten que su sueldo da para menos. Detrás de la buena evolución formal de los números de empleo se esconde la realidad del desempleo juvenil, el de larga duración o el de los fijos discontinuos, ese eufemismo para no hablar de parados. Esas mismas cifras no recogen el temor al cambio que produce la revolución digital ni mucho menos los errores que estamos cometiendo al no adaptarnos a un mundo en el que la tecnología está transformando profundamente la naturaleza del trabajo y exige nuevas capacidades, enfoques y oportunidades para todos. Los empresarios dudan en apostar de nuevo por su país, nunca la inversión privada ha sido tan baja, y como consecuencia, los jóvenes mejor preparados se ven obligados a trabajar en otros países.

Nos estamos quedando atrás. La España que van a heredar las próximas generaciones contempla un panorama desalentador: cada vez menos españoles creen que sus hijos vayan a vivir mejor que ellos. El verdadero progreso no se mide solo en cifras de PIB, sino en la capacidad de generar prosperidad de manera sostenible y empleo de calidad. Frente al muro y la polarización, aprovechar las oportunidades de nuestro país y caminar juntos con optimismo. Frente al relato con medidas cosméticas y de corto plazo, esfuerzos serios y credibilidad. Frente a la resignación, confianza y seguridad en el futuro.

Vamos a poner en marcha un nuevo modelo de crecimiento. Podemos hacerlo. Contamos con la credibilidad de haber aportado el 80% del avance económico real de los últimos 30 años. Aspiramos a un país en el que merezca la pena trabajar y donde se promueva una cultura del trabajo y no del subsidio; un país capaz de atraer talento e inversiones, imprescindibles para mejorar nuestra productividad y el bienestar de nuestros ciudadanos; un país donde el Estado no asfixie con impuestos, trate a sus ciudadanos como lo que son, ciudadanos, y no meros contribuyentes; que no se vea el éxito con recelo y suspicacia, y que no persiga a sus empresarios más exitosos; un país que ponga límites a la sobrerregulación y al afán por controlar a las personas.

Apostamos por hacer cada día más competitivos sectores tradicionales de la economía española como el turismo, el comercio, la agricultura o la automoción, al tiempo que promoveremos oportunidades en nuevos ámbitos como la

tecnología, la inteligencia artificial, la energía, el sector biosanitario, o el vinculado con el idioma. Con un nuevo paradigma, España tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los motores de Europa. Y Europa no ganará el futuro si no cuenta con una España fuerte y próspera.

Apoyar a los que arriesgan

Tener y hacer crecer un negocio tiene que merecer la pena, sobre todo si eres autónomo. No solo respetamos, sino que apoyamos a los empresarios que buscan, con su trabajo e iniciativa, mejorar la vida de la gente y contribuir a la prosperidad de nuestra sociedad. No se trata de concesiones o de premios; nadie quiere que se le regalen cosas: basta con confiar, no deshonrar, ni poner la zancadilla con trabas a todos aquellos que deciden arriesgarse. Nadie encarna esta visión mejor que los autónomos, quienes invierten su propio patrimonio y su tiempo para convertir una idea en un valor económico y social para el país. Ese esfuerzo debe ser premiado, no penalizado.

Es imprescindible innovar. Es fundamental apoyar a nuestros empresarios y científicos a experimentar e inventar. No podemos seguir considerando la innovación como un aspecto accesorio: invertir en I+D+i es clave para recuperar soberanía económica. Sin innovación, no hay productividad; sin productividad, no hay prosperidad. Además, el avance de la IA representa una oportunidad histórica para modernizar nuestra economía, fortalecer nuestros servicios públicos y situar a España a la vanguardia de la innovación: no podemos entorpecerlo con regulaciones excesivas. Tenemos que fomentar la conexión entre empresas y centros de investigación, dar incentivos al que arriesga e innova, y liberar a la gente de la asfixia fiscal y burocrática que inhibe el progreso.

No al exceso de burocracia. España está operando por debajo de sus posibilidades por el exceso de burocracia y de regulación, que entorpece el emprendimiento, perjudica la innovación y acaba con la competitividad. Eso se tiene que acabar: es urgente desregular, simplificar administrativamente y eliminar toda normativa innecesaria, imprecisa o inútil. Y, además, por cada nueva regulación que se apruebe, suprimiremos tres.

La mayor simplificación que podemos hacer es que funcione la unidad de mercado en España. La sobrerregulación ha convertido esta promesa en un mosaico de reglas que impide a empresarios y trabajadores operar con libertad. Seguiremos con nuestra agenda de simplificación para que las empresas aprovechen el potencial de competir en igualdad de condiciones en toda España.

Potenciar la competitividad, especialmente en la industria estratégica y los servicios avanzados, es clave para el desarrollo económico y social de nuestro país. El tejido industrial genera empleo estable y bien remunerado al tiempo que vertebra el territorio, fijando población. Además, sostiene una red de servicios auxiliares que impulsan las economías locales. Para consolidar este crecimiento y atraer nuevas inversiones, es esencial facilitar el desarrollo de suelo industrial que actúen como polos de actividad en todo el territorio. Apostar por una industria moderna y eficiente no es una opción: es imprescindible para aumentar la productividad y el bienestar.

Soberanía en materias primas: una oportunidad para una industria sólida y territorios con futuro. España dispone de recursos estratégicos que, gestionados con responsabilidad, pueden reducir nuestra dependencia del exterior y reactivar el tejido industrial. Esta es una oportunidad clave para dinamizar zonas con potencial económico, generar empleo estable y fortalecer nuestra competitividad. Promoveremos los proyectos necesarios para garantizar un acceso seguro y sostenible a las materias primas fundamentales que fortalecerán nuestra soberanía, nuestro crecimiento y el bienestar de todos.

Consolidar un modelo turístico próspero, diversificado y bien regulado. Estamos orgullosos de ser un reclamo turístico mundial con una oferta de excelencia y creemos que las políticas públicas deben reconocer, y no criminalizar, a un sector que representa el principal motor de la economía española y del que dependen millones de puestos de trabajo. Defendemos un enfoque capaz de equilibrar el reconocimiento al sector y el bienestar de la población local y reivindicamos el trabajo del turismo español en materia de sostenibilidad. Afortunadamente, la diversidad de nuestra geografía permite ampliar la oferta y distribuir la demanda, aliviando la presión sobre los puntos más saturados, sin necesidad de restringir la actividad turística ni los beneficios que reporta.

Juventud y empleo: recuperar el ascensor social

Sí al esfuerzo propio y no a vivir del Estado. Defendemos un país en el que merezca la pena trabajar y en el que el ascensor social vuelva a funcionar: es la mejor forma de darle una oportunidad a las nuevas generaciones. La política no puede ser una fábrica de ciudadanos dependientes del Estado; debe posibilitar una sociedad fuerte, que reconozca el talento individual, al tiempo que integra a quien padece desventajas. Alargar artificialmente la educación obligatoria hasta los 18 años solo serviría para maquillar las cifras de paro y provocar que los jóvenes sean más dependientes.

No al muro al que se enfrentan los jóvenes. Comenzamos a trabajar muy tarde comparado al resto de europeos y con cualificaciones desajustadas a lo que necesita el mundo laboral. El fracaso escolar, la insuficiente proporción de titulados de FP y la mayor duración de los grados universitarios en España nos aleja de nuestro objetivo de empezar a trabajar lo más preparados posible y cuanto antes. Además, con ese objetivo es necesario fomentar la formación dual en las universidades y la FP. Para ello es necesario quitar las trabas impuestas por el actual gobierno a la realización de las prácticas por nuestros alumnos en las empresas y sustituirlas por medidas de apoyo y promoción.

No al muro al que se enfrentan los jóvenes. Comenzamos a trabajar muy tarde comparado al resto de europeos y con cualificaciones desajustadas a lo que necesita el mundo laboral. El fracaso escolar, la insuficiente proporción de titulados de FP y la mayor duración de los grados universitarios en España nos aleja de nuestro objetivo de empezar a trabajar lo más preparados posible y cuanto antes. Además, con ese objetivo es necesario fomentar la formación dual en las universidades y la FP y quitar las trabas impuestas por el actual gobierno a la realización de las prácticas por nuestros alumnos en las empresas, que deben ser sustituirlas por medidas de apoyo y promoción.

Mercado laboral: defender a los que trabajan

Un mercado laboral adaptado a la realidad. Debemos ser conscientes del impacto que la tecnología tendrá en el empleo. La capacidad de esta revolución para mejorar nuestra economía y el mundo laboral es inmensa, pero también dejará perdedores: debemos actuar desde ahora para asegurarnos de que nuestros trabajadores no están entre ellos. Hay que dejar de penalizar el empleo con cargas adicionales al trabajo que lo hacen menos competitivo. Reconocemos el diálogo social como un pilar de nuestro modelo democrático que debe ser renovado y adaptado en sus procesos y estructuras a fin de ser más ágil y representativo de la realidad del mercado laboral. Defendemos la creación de sistemas de bancos de horas y la flexibilización del horario laboral, allá donde sea posible, mediante procedimientos que atiendan las especificidades de los diferentes sectores y no ahoguen de forma irremediable a pymes y autónomos.

Que valga la pena trabajar. Nuestra tasa de sobre cualificación es la más alta de toda la Unión Europea, de ahí que los más talentosos se vean forzados a irse para buscar oportunidades fuera. Por otro lado, no aprovechamos la oportunidad que representa la FP para la formación en capacidades muy necesarias al tener una de las tasas más bajas de la UE. Al mismo tiempo, importamos mucha mano de obra poco cualificada. Por todo ello, son

necesarios cambios estructurales. Es prioritario establecer un marco legislativo, administrativo y fiscal que incentive la creación de empleo estable, de calidad y de alto valor añadido, frenar la precarización y retener talento. Necesitamos un sistema educativo a todos los niveles que promueva la excelencia, centros educativos que puedan desarrollarla e incentivos para que ese talento quiera quedarse o venir del exterior. Queremos que el paro baje porque hay más ingenieros o más electricistas trabajando aquí, no porque hayan emigrado.

Es urgente disminuir el absentismo laboral, un problema que perjudica la viabilidad de las empresas, la seguridad del empleo y es profundamente injusto, porque los que cumplen con su trabajo acaban soportando las consecuencias de quienes incumplen injustificadamente su responsabilidad.

Esto va de que suba el salario medio, no sólo de que el Estado aumente el mínimo. No podemos resignarnos a ser una economía de rentas justas -por no decir bajas- como si fuera nuestra condición natural. No lo es. Es el síntoma de una falta de rumbo, de ambición y de estrategia nacional: el salario mínimo debería ser el menos frecuente de los salarios, y no el más habitual entre los trabajadores. Necesitamos mejorar el poder adquisitivo de los españoles y contar con una clase media fuerte.

Las políticas de empleo, al servicio de la gente. El país con mayor paro de Europa no puede permitirse la pervivencia de un modelo tan ineficiente. El sistema público de empleo debe dejar de ser visto como una montaña de burocracia lenta para quienes necesitan con urgencia un trabajo. Hay que poner en marcha políticas activas adaptadas a las necesidades de las personas y empresas, con especial atención a las pymes y ayudas potentes a aquellos que realmente lo precisen. El subsidio por desempleo ha de estar condicionado a la no renuncia reiterada e injustificada de ofertas de trabajo adecuadas.

Un país de oportunidades, vivas donde vivas

Derecho a quedarse. Todos los españoles deben tener las mismas oportunidades, vivan donde vivan. España es un país plural con estilos de vida y economías muy diferentes. Esta diversidad es una fuente de riqueza, pero también plantea algunos retos. Debemos favorecer un marco institucional que apoye el desarrollo de nuevos focos de crecimiento y ayudar a las regiones que se han quedado atrás a reinventarse, aprovechando el talento y las condiciones que ya existen en cada lugar. El objetivo es claro: que cada uno sea libre de vivir donde quiera y que los territorios estén al servicio de las personas, y no al revés. Para ello es necesario velar porque las zonas rurales, particularmente los

pequeños municipios, preserven los servicios básicos que garantizan la calidad de vida de sus ciudadanos, como los financieros o de transporte, y también modular su carga administrativa. Asimismo, hay que compensar las desventajas que afectan a las regiones por su condición de insularidad y/o ultraperiferia.

250 son los nuevos 50. España necesita más y mejores empresas para generar innovación y mejores salarios; más emprendedores, con nuevos proyectos, más pymes que generen empleo y más proyectos que escalen internacionalmente. Hay que favorecer el aumento del tamaño de nuestras empresas, y eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial: 250 trabajadores deben ser los nuevos 50.

Infraestructuras, energía y agua: preparados para competir

Una nación avanzada garantiza la seguridad de sus infraestructuras críticas y proyecta confianza. Hace una década, ni imaginábamos un apagón, trenes parados, o un aeropuerto internacional descuidado. Hoy, esa certeza se ha perdido, y con ella, parte del prestigio de España. Un país que permite la degradación de sus espacios clave compromete no sólo el servicio público que en ellos se presta, sino su imagen global.

Gobernar es asegurar, pero también inspirar. Las infraestructuras españolas deben funcionar con excelencia y reflejar, en cada detalle, la ambición de una España que quiere liderar Europa. Tenemos que garantizar la cohesión territorial del país completando nuestras infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias, y portuarias, mantenidas de forma responsable y mejorar sus conexiones, tanto para pasajeros como mercancías, con Europa. Las infraestructuras de comunicaciones también tienen un papel esencial, no solo para la economía digital, la administración pública y los servicios esenciales sino también para la seguridad nacional. Es indispensable que diseñemos unas infraestructuras tecnológicas resilientes y autónomas, capaces de seguir operando ante situaciones críticas, y proteger las ya existentes frente a posibles ciberataques, sabotajes o eventos naturales adversos.

Energía barata y fiable ya. La energía es un motor central de la economía y tenemos la infraestructura y condiciones naturales necesarias para desarrollar una ventaja competitiva a través basada en costes energéticos más bajos. Para ello, necesitamos una hoja de ruta realista que, desde la neutralidad tecnológica y el crecimiento en energías renovables, garantice energía limpia, barata, segura

y estable. España es el único país del mundo que, disponiendo de centrales nucleares a mitad de su vida útil, mantiene un calendario de cierre sin contar con una alternativa tecnológica viable. Es un verdadero suicidio energético. Por eso, apoyamos la prórroga de la energía nuclear, como complemento indispensable al desarrollo de todas las energías renovables, para garantizar una energía limpia, barata, segura y sin interrupciones. Las empresas lo necesitan si queremos aprovechar la oportunidad de recuperar y atraer industrias intensivas energéticamente.

Abordamos el cambio climático con la importancia que requiere, pero desde un diagnóstico exclusivamente científico, no ideológico. Las políticas climáticas no pueden construirse a costa del bienestar: las oportunidades de la gente y la transición ecológica debe ser ordenada, realista y justa. No se trata de elegir entre crecimiento económico y protección ambiental, sino de integrar ambos para construir un modelo de crecimiento compatible con la prosperidad compartida. Los ciudadanos no pueden ser los que soporten económicamente el peso de unas políticas climáticas basadas en plazos muchas veces irrealizables, que generen un aumento desproporcionado del coste de la vida. Ellos deben ser parte del futuro, no víctimas del cambio.

El agua como garantía de prosperidad. Tenemos unas condiciones de partida extraordinarias: gran variedad de climas y suelos, amplia superficie de cultivo disponible y un gran prestigio internacional, pero sin disponibilidad garantizada de agua, el modelo productivo no funciona. Tenemos que hablar de agua e infraestructuras hídricas también cuando no hay sequía ni inundaciones, porque volverá a haberlas. Debemos estar preparados y proteger a las personas ante fenómenos extremos. Es necesario acometer inversiones, mejorar el modelo de gestión y planificar en base a la ciencia y no a la ideología. Por ello, entendemos imprescindible e inaplazable la aprobación de un Pacto Nacional en materia de agua, basado en el acuerdo y el consenso de todas las Comunidades Autónomas, en el que se defina su participación en el modelo de gobernanza.

Agricultura y pesca: seguridad en lo básico

Los agricultores no son jardineros, y los pescadores y ganaderos no son veterinarios. Su labor es fundamental y está gravemente amenazada por la sobrerregulación y las políticas verdes, que han antepuesto la ideología a la realidad. Debemos defender el campo y la costa españoles para garantizar nuestra soberanía alimentaria, la producción de alimentos de calidad y preservar el medio ambiente, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida.

Proteger el campo y la costa es proteger a las gentes que los habitan, asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras y reforzar nuestra autosuficiencia. En los últimos años, el sector primario ha sido atacado y desprestigiado desde las instituciones, agravando su situación, a pesar de que son los que más aportan a la creación del paisaje y el mantenimiento de la biodiversidad. Para revertir su deterioro, es necesario evitar la despoblación del medio rural, garantizar el relevo generacional, acabar con la competencia desleal y reconocer la calidad de nuestros productos, impulsando las actividades relacionadas, como el turismo rural y la caza. Esto sólo puede hacerse si defendemos con firmeza los intereses de nuestros productores, tanto en Europa como frente a terceros países.

Un Estado que funciona

Defendemos con convicción el libre mercado y la libre empresa. Ser árbitro y al mismo tiempo jugador distorsiona las decisiones e impide que la iniciativa privada se desenvuelva con eficacia. Rechazamos situaciones como el nombramiento de altos cargos de empresas del IBEX35 desde Moncloa. Hay que poner orden y reducir el tamaño del sector empresarial público, limitar el intervencionismo a situaciones donde el mercado no sea capaz de dar un buen servicio, despolitizarlo y asegurar la profesionalidad de sus gestores. El control de precios no soluciona nada, disfraza el problema de fondo y lo empeora.

Más Estado no es la solución. No creemos en posturas dogmáticas sobre qué tareas deben ser asumidas por la Administración. Ni lo público es siempre sinónimo de lo bueno, ni la iniciativa privada lo es de lo malo: el criterio debe ser quién ofrece el mejor servicio al ciudadano, no simplemente si el Estado puede hacerlo. Garantizar un buen servicio requiere premiar la innovación y las soluciones efectivas. El estándar de exigencia ha de ser mayor cuando se trata de gestionar los recursos que son de todos: el dinero público no puede destinarse a fines ideológicos o a subvencionar a entidades afines. Las empresas públicas a nivel nacional, autonómico y local tienen que estar administradas profesionalmente: se acabó llevarlas a la quiebra y repartir bonus entre los altos cargos responsables del desastre.

Una Administración profesional, integrada por empleados competentes e independientes, es la mejor garantía de nuestro Estado social y democrático de Derecho, un seguro para que las Administraciones Públicas sirvan con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley. También eso está ahora en peligro, con iniciativas que ponen en riesgo los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública o que tratan de condicionar

su neutralidad con interferencias espurias. Apoyamos con determinación todos los esfuerzos orientados a preservar un modelo de función pública profesional, y combatiremos cualquier tipo de injerencia que pretenda politizar el ejercicio de sus responsabilidades, singularmente en todos aquellos cuerpos llamados a desarrollar funciones directivas en la Administración.

Toda emergencia exige presencia. En situaciones de catástrofe natural o emergencia extraordinaria, el Estado tiene la obligación de poner todos los recursos disponibles al servicio de las zonas afectadas y garantizar una respuesta inmediata a los afectados. **El deterioro institucional tiene un coste económico.** Violentar las instituciones no sólo ahuyenta a los inversores y frena la iniciativa privada; también limita las posibilidades de mejorar nuestra productividad porque falta seguridad jurídica. El día que haya un gobierno que respete las instituciones veremos, casi de forma inmediata, una mejora en el bienestar.

Gastar bien y aliviar la carga fiscal

Endeudarse no es progreso. El Gobierno socialista ha aumentado la deuda pública de cada hogar en más de 20.000 euros, lo que supone, además de una amenaza para la soberanía nacional, al quedar nuestro país en manos de sus acreedores, una profunda injusticia para las generaciones venideras, ya que les impide tomar sus propias decisiones por haber comprometido sus recursos. Es momento de eliminar el despilfarro en las cuentas públicas: tomaremos medidas de calado sobre lo que gastamos, cómo lo hacemos y los recursos que sirven de base para hacerlo. Debemos tener margen para invertir y apoyar a quien lo necesita, al tiempo que diseñamos un nuevo sistema tributario.

Convertir cada euro en futuro, no en propaganda. España no puede permitirse desaprovechar una oportunidad histórica como los fondos europeos Next Generation EU. Estos recursos deben dejar de ser un ejercicio de propaganda para convertirse en motor real de modernización económica. Desde el Partido Popular proponemos una gestión basada en la transparencia, la evaluación por resultados y la implicación real de todas las Administraciones y del conjunto de la sociedad. Solo así lograremos que cada euro se traduzca en empleo, innovación y crecimiento. El país necesita eficacia, no improvisación; resultados, no anuncios.

Impuestos bajos. Somos el partido de quienes sufren el infierno fiscal de este Gobierno. El partido de los trabajadores, los autónomos y los empresarios a los que han asfixiado con sus noventa y siete subidas de impuestos, a pesar de que

son los que más sufren el insostenible incremento del coste de la vida. Llevaremos a cabo una profunda reforma que nos permita contar con un sistema mucho más sencillo y, sobre todo, más justo, que dejará menos espacio para el fraude. Defendemos impuestos bajos para todos, en especial, para las rentas más modestas, los jóvenes, las familias y las clases medias, para que puedan elegir libremente a qué dedican ese dinero, ya sea consumir, ahorrar o invertir. Vamos a darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la Administración tributaria: incorporaremos el ‘derecho al error’ en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente.

No se puede hacer caja con una tragedia. Es de justicia que las personas, autónomos y empresas afectadas por una emergencia nacional de protección civil no paguen impuestos ni intereses por las ayudas, subvenciones, indemnizaciones o prestamos públicos que reciban.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Durante los últimos años, España se ha autorrelegado a un papel de actor secundario en la escena internacional y ha renunciado a la influencia que le corresponde por su peso histórico, geopolítico, económico y cultural. Hoy, en un contexto global de incertidumbre y transformaciones profundas, España no puede permitirse seguir siendo irrelevante.

Necesitamos una política exterior ambiciosa, una verdadera política de Estado en la que colaboren todos los agentes, públicos y privados, para devolvernos la capacidad de influir en las decisiones que afectan a nuestro futuro. Nos hace falta cumplir con algunas condiciones necesarias, pero no suficientes: en primer lugar, reforzar la cohesión interna y mejorar nuestra economía, porque un país debilitado internamente no puede acometer una política exterior creíble. Además, debe existir voluntad política. Para tener política exterior hay que ambicionar tener una política exterior estratégica, no meramente táctica y cortoplacista.

España debe volver a defender sus intereses, ser un socio fiable capaz de cumplir con sus compromisos y generar confianza entre sus aliados. Necesitamos determinación, estrategia y una diplomacia mejor dotada, más profesional y moderna que no esté al servicio de intereses partidistas de corto plazo ni sea utilizada en conflictos estrictamente ideológicos. Una política exterior con altura de miras, coherente y ambiciosa, que defienda los intereses a largo plazo de España y nos permita tener más presencia, autoridad e influencia en las organizaciones internacionales de las que hacemos parte.

La credibilidad de un país en el ámbito internacional se construye con hechos, con el respeto a los acuerdos asumidos y con una posición clara y estable en los grandes asuntos estratégicos. Sin fiabilidad, no hay influencia. El prestigio tarda años en crearse, pero se puede perder en un día.

La mejor herramienta para recuperar el protagonismo internacional y proyectar nuestros intereses es la Unión Europea. Estar en el núcleo de la toma de decisiones en Bruselas no es una cesión de soberanía, sino una forma de fortalecerla. España debe aspirar a ser un país que marque agenda, que fije el rumbo de Europa en lugar de limitarse a seguirlo. Es necesario avanzar hacia una mayor integración económica, social y política de la Unión Europea.

Tenemos el potencial para hacerlo. Contamos con una economía que, bien gestionada, puede estar entre las diez más avanzadas del mundo; con una posición geográfica estratégica, como puente entre Europa y África y puerta de

entrada al Mediterráneo; y con una relación privilegiada con Hispanoamérica. Ha llegado el momento de que España vuelva a hablar con voz propia en el mundo.

Seguridad y Defensa

Invertir en seguridad y defensa es una prioridad. Buscamos un retorno: proteger a nuestros ciudadanos, ayudar a nuestros aliados y defender nuestros valores. El vínculo transatlántico sigue siendo indispensable y debemos trabajar para preservarlo y fortalecerlo. En materia de defensa dicho vínculo se plasma en la OTAN, una alianza militar defensiva. España tiene que lograr una fuerza militar a la altura de su puesto estratégico en la geografía, en la Historia y sus alianzas. Debemos fortalecer el pilar europeo de la OTAN, desarrollando una industria de defensa europea competitiva y avanzada que garantice nuestra autonomía estratégica. Por eso, debemos cumplir con los compromisos de inversión asumidos en el seno de la OTAN y hacerlo, en todo caso, con el aval del Congreso de los Diputados. ¿Qué queremos que pase invirtiendo más en seguridad? Nada. Queremos invertir en seguridad para asegurarnos de que no pase nada.

Dignificar el papel de las Fuerzas Armadas. La defensa de nuestras fronteras y la soberanía nacional tiene nombres y apellidos: los de las mujeres y hombres que conforman nuestras Fuerzas Armadas. La ampliación de los efectivos, la mejora de sus condiciones laborales y de conciliación familiar, la renovación de material defensivo o la inversión en medios tecnológicos no son solamente el imprescindible reconocimiento a su trabajo, sino una manera de prestigiarlo fuera y dentro de nuestras fronteras. Impulsaremos una cultura de defensa entre los ciudadanos para que la sociedad sea más consciente de la necesidad de estar preparados ante escenarios adversos.

Europa

Europa importa. Sobre la base de unas raíces filosóficas y culturales comunes los europeos hemos forjado un modo de vida que procede de Grecia, Roma y Jerusalén y que en lo político se traduce en el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la democracia y la libertad. Esos son los valores que, como fundadores de Occidente, nos hacen especiales a los europeos. El Partido Popular trabaja por ellos y son nuestra seña de identidad.

Los europeos vivimos momentos difíciles. Dos guerras se libran en nuestra vecindad. La fragmentación del mundo en bloques amenaza con acarrear enormes costes a nuestras empresas, que se han beneficiado en las últimas décadas de rutas comerciales abiertas y seguras. La curva demográfica describe una tendencia preocupante que amenaza la comunidad política europea, nuestro modo de vida y nuestro bienestar. La transición energética y la eclosión de la inteligencia artificial suponen un reto para la competitividad de nuestras empresas, singularmente de la industria, así como un desafío a los valores democráticos y sociales. Europa debe dar una respuesta conjunta, sensata y contundente que devuelva el optimismo a las clases medias y la fe en sus instituciones democráticas, sobre todo, a los más jóvenes. Europa debe recuperar su sentido de la realidad, su imaginación y valentía.

Es mucho lo que España puede aportar a Europa. Tenemos una oportunidad. El Partido Popular hoy dirige la Comisión Europea, es el primer partido en el Parlamento y gobierna en 23 de los 27 Estados de la Unión. Estamos en condiciones de imprimir un nuevo giro a Europa. En un mundo globalizado, la Unión Europea es nuestra mejor herramienta para defender nuestros intereses y garantizar nuestra estabilidad. Que España recupere el papel que le corresponde depende de nuestra propia determinación. La UE tiene que fortalecerse moral, tecnológica, económica y militarmente: tenemos que garantizar nuestra seguridad, sin depender de nadie, ser más autosuficientes y menos vulnerables al chantaje de terceros. En este camino, el compromiso de España con Europa será firme y definitivo.

Defendemos la soberanía nacional y la integridad territorial de los países europeos. Son principios fundamentales que no pueden darse por sentados. La guerra en Ucrania es una advertencia clara de lo que ocurre cuando Europa descuida su propia seguridad. Si no nos tomamos en serio nuestra defensa, corremos el riesgo de que la fuerza prevalezca sobre el Derecho y de que nuestro futuro quede en manos de otros. La paz y la estabilidad en Europa dependen de que los europeos tengamos voluntad de protegerlas. La soberanía y la integración europea van de la mano.

Una UE más grande, sólo si es más fuerte. La ampliación de la UE tiene que estar motivada por la responsabilidad y la eficacia, no por la inercia o la prisa y debe basarse en el cumplimiento de criterios objetivos. No tiene sentido integrar nuevos miembros si éstos no van a fortalecer el proyecto europeo. Es esencial garantizar que quienes se sumen compartan nuestros valores democráticos, tengan una cultura política compatible con la nuestra y no pongan en riesgo la estabilidad económica del continente. Una Europa más

grande sólo será más fuerte si se construye sobre la cohesión y el respeto a sus principios fundamentales. La UE debe realizar reformas internas antes de recibir a posibles nuevos miembros.

Gibraltar

Reivindicamos la soberanía española. Gibraltar no puede entrar en la UE por la puerta de atrás. Es imprescindible garantizar primero los derechos de los trabajadores españoles en el peñón, acabar con la competencia fiscal desleal y el blanqueo de capitales y que los gibraltareños que residan en España, tributen en España. La normativa europea de medio ambiente se tiene que cumplir como en cualquier lugar de la Unión. Además, la policía española desplegada en Gibraltar tiene que ejercer sus funciones de una manera plena, no sólo sellar pasaportes, y habrá que establecer controles para la base británica, su personal y su material militar, por su especial sensibilidad. Cualquier acuerdo en relación a Gibraltar que es reversible- debe ser sometido, como tratado político, a las Cortes Generales, que tendrán que expresar su opinión por puro sentido democrático.

África

Dos grandes vecinos en nuestro flanco sur exigen visión estratégica y firmeza. Debemos buscar la mejor relación posible con Marruecos y Argelia de manera equilibrada porque deseamos la estabilidad en el Magreb. En el marco de la Unión Europea, siempre defenderemos nuestros intereses: la españolidad de Ceuta y Melilla, nuestras aguas, las Islas Canarias, los aspectos económicos-comerciales y energéticos, la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico, y el respeto del Derecho Internacional y a las Resoluciones de Naciones Unidas en relación al Sáhara Occidental. Debemos, asimismo, recuperar nuestra presencia en África Occidental y Subsahariana, especialmente con Guinea Ecuatorial, país con el que tenemos vínculos históricos, idiomáticos y culturales. El Sahel precisa una atención prioritaria para luchar contra diversas amenazas como el yihadismo, el crimen organizado o la utilización de la inmigración irregular.

América

España e Hispanoamérica somos indisociables. Compartimos una herencia común que va más allá de la lengua: nos unen el presente y el futuro, principios, valores e instituciones que han perdurado siglos. Frente a quienes dicen que la Hispanidad fue opresiva para deslegitimar nuestra historia y dividirnos, afirmamos que fue un proceso de mestizaje en el que se fundaron ciudades, universidades, hospitales y sistemas de gobierno, una cultura y una forma de ver la vida que conforman una comunidad que perdura mucho más allá de lo político. España debe combatir la leyenda negra y asumir un papel más activo en la región, fortaleciendo lazos con unas naciones que hoy se ven oprimidas por la injerencia de potencias extranjeras como Rusia, China o Irán y por las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sólo reivindicando nuestra historia y actuando en conjunto podremos defender nuestra soberanía y nuestros valores compartidos.

Nuestro futuro común nos une. España debe recuperar la presencia y el protagonismo perdido con una política hispanoamericana a largo plazo, no de partido. Asimismo, España debe lograr que la Unión Europea también tenga mayor presencia, política y económica en Iberoamérica y defienda de manera inequívoca los principios de libertad, democracia, prosperidad y el respeto del Estado de Derecho. Lo que queremos para España es lo que queremos para Hispanoamérica.

Cuidar el vínculo transatlántico. Debemos alinear intereses y trabajar por una relación más equilibrada y fuerte entre Estados Unidos y la Unión Europea, que evite a toda costa una guerra comercial que sólo perjudicaría a ambas partes. El atlantismo, más allá de las concretas dificultades políticas coyunturales, es una comunidad fundamental de valores y prosperidad compartida imprescindible para que Europa tenga un papel relevante en el mundo.

Asia

China es un socio, un competidor y un rival sistémico. Al mismo tiempo sus políticas pueden desafiar nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. Debemos estar atentos y actuar unidos, junto a nuestros socios de la UE, especialmente en cuestiones económico-comerciales. Tenemos que utilizar todos los instrumentos para evitar distorsiones provocadas por malas prácticas chinas. Debemos, asimismo, trabajar conjuntamente con nuestros aliados de la OTAN y países afines en el ámbito Indo-Pacífico en cuestiones políticas,

económicas y de seguridad. En cualquier caso, defenderemos los intereses de las empresas españolas en el gigante asiático.

El drama humano es insostenible. Los rehenes deben ser liberados inmediatamente, la población civil en Gaza debe ser protegida y ayudada sin la opresión de la organización terrorista Hamás para que pueda prosperar y ser libre. El derecho internacional humanitario debe respetarse escrupulosamente, especialmente la libre distribución de ayuda. Hamás, cuyos ataques provocaron el actual conflicto, debe ser combatida y no puede formar parte del futuro. Cuando esto suceda, la solución de dos Estados puede ser la vía para garantizar una paz duradera entre Israel y Palestina siempre que existan interlocutores válidos y reconocibles. España debe apoyar dicha solución alcanzada tras un proceso negociador real, sin imposiciones unilaterales, basado en el reconocimiento mutuo y con garantías de seguridad. El régimen iraní es mucho peor que perturbador... Es una amenaza nuclear.

Un libre comercio responsable

Creemos en el libre comercio sometido a normas comúnmente acordadas con nuestros socios comerciales. Los aranceles deben utilizarse de manera selectiva y en casos extraordinarios para corregir prácticas contrarias al libre comercio. Los aranceles empobrecen y el libre comercio genera estabilidad y prosperidad. El Acuerdo UE-Mercosur es, en conjunto, positivo y tiene suficientes mecanismos para garantizar que no habrá distorsiones. Además, alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-UE debe ser un objetivo.

Cooperación al desarrollo

Una cooperación solidaria, eficaz y eficiente no debe responder a motivos ideológicos. Es un pilar de nuestra acción exterior. Se debe realizar una concentración de esfuerzos geográfica y temática. En un contexto de crisis y desafíos internos, los recursos públicos deben priorizarse para atender las necesidades reales de los ciudadanos. No tiene sentido mantener programas de cooperación ineficaces o destinar fondos a países que no garantizan su uso adecuado. Es necesario auditar, y redirigir estos gastos para que cada euro contribuya al bienestar y desarrollo donde verdaderamente sea necesario, de conformidad con los acuerdos internacionales sobre financiación de los países en vías de desarrollo. La solidaridad mal gestionada no es solidaridad, es derroche y el derroche perjudica los propios objetivos de la cooperación. La cooperación al desarrollo debe ser un instrumento que contribuya a disminuir la inmigración regular.

El español

Defensa y fomento del español. El español, con más de 600 millones de hablantes en el mundo, es un patrimonio de incalculable valor que constituye una de las mayores fortalezas de nuestra nación. Somos herederos de mil años de cultura en español y eso supone un activo estratégico que define nuestra identidad, impulsa nuestra economía, enriquece nuestra cultura y amplifica nuestra influencia internacional. España debe reconocer la grandeza del español, valorar su magnitud y promoverlo con responsabilidad y orgullo en todos los ámbitos.

Españoles en el exterior

España no puede permitirse dar la espalda a los millones de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras. Facilitar su retorno no es solo un acto de justicia, sino una oportunidad para reforzar nuestra cohesión social, aprovechar talento y afrontar el reto demográfico. Para ello, debemos eliminar trabas fiscales y administrativas, mejorar la atención consular y garantizar derechos a su regreso como la sanidad, la vivienda o la homologación de títulos universitarios. Una nación que se respeta a sí misma cuida de los suyos, estén donde estén.